

## NARCOTRÁFICO, VIOLENCIA POLÍTICA Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS HACIA COLOMBIA EN LOS NOVENTA\*

*Bruce Michael Bagley'*

El presente ensayo examina el impacto de las políticas de control de drogas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la evolución del cultivo de drogas, el narcotráfico y la violencia política en Colombia durante los años noventa. La tesis central radica en que la guerra contra las drogas librada por Washington y Bogotá durante esta década no solamente fracasó en dar freno al crecimiento del tráfico de drogas y a la consecuente corrupción, sino que, de hecho, fue contraproducente. Entre sus consecuencias involuntarias más importantes están la expansión acelerada de las actividades de cultivo y producción de drogas, la dispersión y proliferación del crimen organizado y la intensificación de la violencia política y la lucha guerrillera en el país. Como resultado, a inicios del 2000 Colombia enfrentó más amenazas serias a su seguridad nacional y a su estabilidad política que en 1990. En el ensayo se concluye que el escalamiento masivo de las estrategias defectuosas contra las drogas de la década anterior propuestas por la administración Clinton, en enero del 2000, tienden más a empeorar los actuales problemas de violencia y de inseguridad en Colombia que a resolverlos.

### CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE DROGAS EN COLOMBIA

A pesar del aporte de casi mil millones de dólares en ayuda antinarcóticos al Estado colombiano durante la década del noventa, en 1999 Colombia se había convertido en el primer país cultivador de coca del mundo, al producir más hoja de coca que Perú y Bolivia juntos (GAO, 1999a: 4-5). Entre 1989 y 1998, la producción de hoja de coca creció en un 140%, de 33.900 a 81.400 toneladas métricas. Más notable aún, los niveles de producción en 1999 aumentaron más del doble de los totales de 1998, al alcanzar alrededor de 220 toneladas. Este dramático ascenso en la producción total reflejó el hecho de que entre 1996 y 1999 el número total de hectáreas de hoja de coca en cultivo en Colombia aumentó casi el 100%, de 68.280 a 120.000 hectáreas. Esta tremenda expansión ocurrió pese a la existencia de un programa de erradicación permanente de la Policía Nacional de Colombia que fumigó un récord de 65.000 hectáreas de coca sólo en 1998 (aproximadamente 50% más que el total para 1997). En el año 2000 se proyectaba que el área total de cultivo aumentara a 200.000 hec-

---

\* Traducción: Marcela Londoño.

\*\* Profesor de Estudios Internacionales, School of International Studies, Universidad de Miami, Coral Gables, Florida.

tareas y que puede alcanzar 500.000 hectáreas hacia 2002, si continúan las tasas actuales de expansión durante los próximos años (Departamento de Estado, 1999; *Se-mana*, 1999a, Associated Press, 2000a; Johnson, 2000a).

De manera concomitante, Colombia también mantuvo su posición como la principal nación refinadora de cocaína, al proporcionar cerca del 80% (220 toneladas métricas) del total de las importaciones de cocaína (aproximadamente 300 toneladas métricas) introducidas a los Estados Unidos en 1999. En el año 2000 se esperaba que Colombia produjera entre 330 y 440 toneladas métricas de cocaína pura tanto de coca cultivada en el país, como de base de coca traída desde Perú y Bolivia.

Durante la década del noventa la producción de amapola (materia prima de la heroína) en Colombia también se disparó de cero en 1989 a 61 toneladas métricas en 1998. Mientras estos totales de producción significaban que Colombia todavía se podía clasificar como un actor menor en el mercado de la heroína (menos del 2% del total de la producción global), le permitieron luego convertirse en el primer proveedor del oriente de Estados Unidos a finales de la década, al exportar cerca de seis toneladas métricas de heroína pura anualmente.

Con aproximadamente 5.000 hectáreas en cultivo, Colombia también continuó siendo un productor importante de marihuana a lo largo de la década.

En 1998 y 1999, Colombia abasteció alrededor del 40% (4.000 toneladas métricas) del total de importaciones anuales de *Cannabis sativa* al mercado estadounidense.

### **Cultivo de droga y producción en la región Andina**

No obstante estas lamentables estadísticas, sería impreciso concluir que la "guerra antidrogas" promovida por Estados Unidos en toda la región Andina fue un total fracaso durante los años noventa. En contraste con la situación colombiana, el cultivo de coca en Perú cayó al 27% entre 1996 y 1997 solamente, al bajar de 96.000 hectáreas a 70.000 hectáreas. En 1999, se cultivaron menos de 50.000 hectáreas de coca en Perú. Como resultado directo, la producción total de cocaína en ese país también disminuyó notoriamente durante los noventa, de un alto nivel de 606 toneladas métricas en 1992 a 264 toneladas en 1998. En el 2000 se proyectaba que Perú produciría sólo 192 toneladas métricas. Desde marzo de 1998, sin embargo, la recuperación en el precio de la hoja de coca en Perú ha amenazado con reavivar el crecimiento del cultivo en ese país (Departamento de Estado, 1999; Krauss, 1999).

Al igual que Perú, Bolivia también registró disminuciones substanciales en el cultivo de coca durante la década, cayendo de 48.800 hectáreas en 1996 a 46.000 en 1997 y a 38.000 hectáreas en 1998, mientras que el total de la producción de cocaína bajó de 248 toneladas métricas en 1992 a 77 toneladas en 1999. En el 2000, se esperaba que la producción cayera aún más, 55 toneladas métricas (Departamento de Estado, 1999; Cabrera, 1999).

Gran parte del éxito de los programas de erradicación de coca y desarrollo alternativo respaldados por EU en Perú y Bolivia a finales de la década del noventa se puede atribuir al rompimiento de la "ruta aérea" que había permitido a las organiza-

ciones traficantes colombianas de principios de la década transportar pasta de coca o "base" desde estos dos países andinos hacia Colombia, en donde era posteriormente refinada a cocaína y luego introducida a Estados Unidos. La ruta aérea efectivamente colapso a finales de 1995 después que la Fuerza Aérea peruana, bajo las órdenes del presidente Alberto Fujimori, comenzó a disparar a los aviones sospechosos que volaban entre Perú y Colombia. De hecho, durante 1995 los peruanos derribaron 25 aeronaves y obligaron a otras a aterrizar para ser inspeccionadas. Como resultado, entre abril y agosto de 1995 la demanda de hoja de coca en Perú se desplomó y los precios de la hoja cayeron a más del 60%. En combinación con los esfuerzos más agresivos de erradicación adelantados por los gobiernos de Perú y Bolivia (con respaldo financiero estadounidense) en 1996 y los años posteriores, los programas de desarrollo alternativo comenzaron a gozar de un éxito considerable entre los campesinos cultivadores en ambos países. Con la ruta aérea destruida, sin embargo, los traficantes colombianos expandieron velozmente el cultivo de coca en Colombia, desplazando de manera progresiva a Perú y Bolivia como los principales países cultivadores de coca en el mundo a finales de los años noventa (Krauss, 1999; *The Economist*, 2000).

En 1999, el continuo éxito del elogiado programa de erradicación de coca en Perú estuvo en seria amenaza, dado que el precio de la hoja de coca en el país se volvió a disparar durante el año a dos tercios de su aumento previo en 1995, con lo cual se estimuló de nuevo el cultivo campesino. Varios factores parecen dar cuenta de esta reactivación del cultivo de coca en Perú. En primer lugar, los traficantes peruanos en-

contraron gradualmente formas de reabrir algunas rutas aéreas a Colombia y reemplazar otras por rutas por carretera, río y mar, lo cual subió la demanda internacional por la coca de Perú e hizo más lucrativo su cultivo en el país. La decisión del gobierno estadounidense en mayo de 1998 de suspender los vuelos de inspección AWAC y P-3 Orion sobre Perú para incrementar el espionaje aéreo sobre Colombia en la medida en que las actividades de narcotráfico aumentaron allí, claramente redujo la capacidad de los peruanos de interceptar vuelos cargados de drogas en su territorio nacional. La habilidad de la policía peruana de llevar a cabo operaciones de interdicción más adelante se menguó cuando el Fenómeno del Niño pasó por Perú a principios de 1998 y obligó a que las fuerzas de seguridad del país trasladaran los helicópteros y aviones normalmente utilizados en operaciones antidrogas hacia la costa Pacífica inundada para desempeñar labores de emergencia. De manera similar, un nuevo estallido de tensiones entre Perú y Ecuador en 1998 condujo a que el Ejército peruano enviara algunos aviones al área de frontera temporalmente y, en consecuencia, se redujo la disponibilidad de naves para actividades de interdicción. A finales de agosto de 1999 la administración Clinton una vez más acordó reanudar vuelos de supervisión sobre Perú para ayudar al Ejército peruano a interceptar aviones traficantes (Krauss, 1999; *The Economist*, 2000).

En segundo lugar, muchos más traficantes comenzaron a procesar pasta de coca a cocaína refinada en su propio país, con lo cual se aumentó la demanda doméstica de hoja de coca en Perú. En tercer lugar, el consumo de cocaína en los principales centros urbanos de Perú creció substancialmente

a finales de la década del noventa (como lo hizo en los centros urbanos más importantes de toda la región durante la década), y eso incrementó las utilidades del mercado local y la demanda total de hoja de coca en Perú. Finalmente, la continua disminución de la oferta de hoja de coca en Bolivia le agregó valor al cultivo de coca en Perú (y Colombia), especialmente a la luz del aumento en la demanda de cocaína en Europa, en donde los precios de la calle casi siempre llegaban al doble de los de Estados Unidos (Krauss, 1999; *The Economist*, 2000).

### **Interdicción de rutas de tráfico de drogas**

Cerca de 13 millones de consumidores de droga en EU gastaron aproximadamente US\$ 67 billones en drogas ilícitas, lo cual hizo que el mercado estadounidense fuera el más lucrativo del mundo para los traficantes colombianos. Washington gastó alrededor de dos tercios de sus US\$ 17.8 billones de presupuesto antidrogas en 1999 en interdicción y otras actividades relacionadas para restringir el flujo de drogas ilícitas de Colombia y otras partes en el hemisferio hacia Estados Unidos. De hecho, a lo largo de la década del noventa el gobierno de EU hizo un gran énfasis en actividades de interdicción como táctica clave en su estrategia de guerra contra las drogas (Office of National Drug Control Policy, 1998: 42-52; GAO, 1999b).

Durante la mayor parte de la década del ochenta, el cartel de Medellín dominó el mercado de droga colombiano y sus principales rutas de tráfico pasaban por (o sobre) el Caribe hacia Estados Unidos vía el sur de Florida y otros sitios a lo largo de la costa Atlántica estadounidense. A medida

que estas rutas "tradicionales" comenzaron a sufrir las presiones de la ejecución estadounidense de la Ley Antidrogas durante la segunda mitad de la década, se dio un cambio gradual de las rutas caribeñas a otras nuevas que pasaban por Centroamérica y México y a través de la frontera del sudoeste de Estados Unidos. A principios de los noventa, un 70 a 80% de la cocaína fue introducida a Estados Unidos desde Colombia a través de México, mientras que sólo un 20 a 30% continuó entrando a través del Caribe (GAO, 1996; Office of National Drug Control Policy, 1997: 49-62).

Este dramático cambio en las rutas de contrabando, sin duda, fue provocado por los grandes esfuerzos de interdicción de las agencias de estadounidenses de ejecución de la ley y reforzado por el creciente involucramiento del Ejército estadounidense (especialmente la Marina y la Fuerza Aérea). El "éxito" en este frente en la guerra contra las drogas, sin embargo, no resultó en una reducción en la oferta de cocaína (o heroína) en el mercado estadounidense, ni mucho menos en un aumento en los precios de la calle durante la década del noventa. En la práctica, los traficantes de Medellín y Cali eran muy adaptables y establecieron rápidamente nuevas rutas de contrabando para reemplazar las más viejas y riesgosas. En lugar de reducir el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos, el crecimiento en la interdicción en el Caribe más bien disparó las actividades ilegales en América Central y México, junto con la consecuente corrupción y violencia que típicamente acompañan las actividades de narcotráfico a gran escala (Golden, 1997; Lupsha, 1995).

Inicialmente los carteles de la droga colombianos pactaron con las organizaciones traficantes mexicanas introducir su "producto" a través de la frontera entre EU y México sobre una simple base de cobro por servicio. A mediados de los noventa, sin embargo, dado que primero el cartel de Medellín y luego el de Cali fueron parcialmente desmantelados por las autoridades de ejecución de la ley de Estados Unidos y Colombia, los *mafiosos* mexicanos comenzaron a demandar productos en vez de dinero en retorno por sus servicios. El papel expansivo de los mexicanos en el tráfico de drogas de los colombianos durante los noventa incrementó sus utilidades ilícitas de manera exponencial y condujo a la consolidación de varios carteles mexicanos (el cartel de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo) que pronto rivalizaron con las organizaciones colombianas en tamaño, utilidades y violencia. De hecho, durante la segunda mitad de la década el surgimiento de estas nuevas organizaciones criminales en México desató en este país una ola sin precedentes de violencia y corrupción por las drogas que amenazó seriamente el naciente proceso de democratización del país (Dillon, 1997; Golden, 2000; Waller, 1999).

Durante la década pasada Washington respondió al incremento en las actividades de narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos reforzando el control antidrogas por el suroeste y presionando a México DF a cooperar más de lleno con las autoridades estadounidenses en operaciones conjuntas de control antidrogas en la frontera y en México. Aunque había sido exitosa sólo parcialmente en comprometer la colaboración mexicana, dada la gran corrupción relacionada con las drogas existente en ese país, la intensificación de la interdicción había comenzado a presentar

un progreso significativo en reducir el flujo de cocaína y heroína colombianas en la frontera. Se le dio un verdadero estímulo a los esfuerzos de control antidrogas gracias a la fisura que se abrió a finales de los noventa entre las organizaciones del narcotráfico colombianas y las mexicanas, por el exorbitante tamaño de la participación mexicana en los beneficios del tráfico de la cocaína. El estallido de violencia de aniquilación mutua entre familias rivales de la mafia mexicana, especialmente después de la muerte del jefe del Cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes (alias "El Señor de los Cielos") en 1997, también contribuyó al declive del uso de rutas mexicanas por parte de Colombia y, por ende, a un mayor éxito de la aplicación del control antidrogas en la frontera (Riley, 2000; Sandoval, 2000).

Una vez más, sin embargo, este "éxito" de la interdicción estadounidense fue más aparente que real. A finales de la década había clara evidencia de que los traficantes colombianos habían comenzado a reutilizar las rutas del Caribe. De manera cada vez más frecuente empezaron a salir a la superficie reportes que indicaban que la cocaína y la heroína provenientes de Colombia estaban transitando a través de República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico hacia Estados Unidos. También había una creciente evidencia del uso de contenedores a bordo de embarcaciones para la introducción de cocaína por los puertos de la costa este de Estados Unidos y de un retorno a los *swallowers* y "muías" para el transporte de heroína a través de viajes en aviones comerciales y cruceros. En 1999, quizá un 50% del tráfico de cocaína y de un 80 a 90% de heroína eran transportados por el Caribe en lugar de México. La lista de los países más utilizados como ru-

tas de tránsito en el Caribe estaba encabezada por República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Cuba. Este retorno a las rutas más tradicionales fue posible, en parte, a causa de la decisión de Washington unos años antes de trasladar cierto personal de aduana del sur de la Florida a la frontera suroccidental y, en consecuencia, dejar las rutas del Caribe y el sur de la Florida expuestas de nuevo a la acción de los narcotraficantes. Las severas recesiones que sufrieron muchas economías del Caribe insular durante la segunda mitad de la década indudablemente las hicieron más vulnerables al tráfico de drogas y a la corrupción resultante (Rother, 1998; *Reuters*, 2000a; Kidwell, 2000; *The Associated Press*, 2000b).

El cierre de la base aérea Howard en Panamá en mayo de 1999, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Washington con el tratado de 1977 de devolver el control de la Zona del Canal a Panamá a finales de siglo, redujo aún más las capacidades de supervisión de Estados Unidos sobre las actividades de narcotráfico en Colombia. Durante la década del noventa, la Fuerza Aérea estadounidense había utilizado la base Howard como base de las operaciones de AWAC para monitorear los tramos no cubiertos por las tres estaciones de radar estadounidenses ubicadas al sur de Colombia. Con la pérdida de Howard en 1999 comenzaron a surgir de nuevo vuelos cargados de drogas, especialmente a lo largo de la costa pacífica colombiana. Las peticiones que el Comando Sur estadounidense ubicado en Miami le hizo al Pentágono en el sentido de acondicionar vuelos de supervisión en Centroamérica y América del Sur y el Caribe fueron satisfechas sólo en el 43% de las veces en 1999. El gobierno estadouniden-

se negoció los derechos para establecer una base aérea en Manta, Ecuador, para reemplazar a Howard durante 1999, pero en febrero de 2000 la construcción de las nuevas instalaciones aún no había comenzado (Johnson, 2000b).

A comienzos de 1998, la Fuerza Aérea colombiana, al igual que su contraparte peruana, comenzó a forzar el aterrizaje o a derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico. Entre 1998 y 1999, varios aviones fueron interceptados. Seis fueron derribados y otros 30 destruidos después de aterrizar. A principios de febrero de 2000 el ministro de Defensa de Colombia, Luis Fernando Ramírez, anunció que el gobierno del presidente Pastrana intentaría reforzar sus actividades de interdicción en el 2000 con la ayuda de nuevo equipo proporcionado por la administración Clinton (Johnson, 2000c).

### **El declive de los carteles colombianos**

En Colombia, pese a que los cultivos y el tráfico se expandieron de manera exponencial durante la década, los esfuerzos combinados de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia sí tuvieron éxito en interrumpir significativamente las actividades de narcotráfico de las dos principales redes del país -los carteles de Medellín y Cali- durante los noventa. A comienzos de esa década, después del asesinato del candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán, cometido por sicarios pertenecientes a la nómina del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y luego el de César Gaviria Trujillo (1990-1994) incrementaron ataques concertados contra el cartel de Medellín. Hacia 1994, después de la muerte de Pablo Esco-

bar en un tejado durante un tiroteo en Medellín en 1993, el cartel de Medellín había sido desmantelado en su mayoría. De igual manera, entre 1995 y 1996 el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-98) persiguió y efectivamente desmanteló el cartel de Cali (Bagley, 1990: 154-171; Clawson y Lee, 1998: 37-61).

Aunque algunos restos de ambas organizaciones continuaron operando a niveles más bajos de actividad (algunas veces desde la cárcel) durante finales de la década del noventa, el desmembramiento de estas dos poderosas y violentas organizaciones transnacionales de narcotráfico a principios de la década constituyó un logro importante para las organismos encargados de la ejecución de la ley en Estados Unidos y Colombia. En la época tranquila de los años ochenta y principios de los noventa, el despiadado cartel de Medellín había sobornado, intimidado y asesinado una veintena de oficiales del gobierno colombiano a todos los niveles para proteger sus operaciones de droga. Luego que el presidente Belisario Betancur (1982-86) comenzara a extraditar narcotraficantes colombianos a Estados Unidos tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ordenado por el cartel de Medellín en 1984, los capos de Medellín lanzaron una campaña narcoterrorista sistemática contra el Estado colombiano diseñada para forzar al gobierno a detener posteriores extradiciones. Su campaña resultó exitosa más adelante cuando en 1997, una Corte Suprema de Justicia colombiana completamente intimidada finalmente dio su fallo de inconstitucionalidad al tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. A mediados de la década de los ochenta, el cartel de Medellín era tan rico y poderoso que podía constituir una

amenaza directa para la seguridad estatal de Colombia. Por lo tanto, la aniquilación del cartel de Medellín y de manera subsecuente el igualmente peligroso cartel de Cali deben reconocerse como victorias importantes en la guerra contra las drogas en Colombia, pues su dimisión efectivamente obstaculizó el surgimiento de un "narcoestado" en el país (Bagley, 1998: 71-92; Sweeny, 1995; Shifter, 1999:14-20).

La innegable importancia de los ataques exitosos del gobierno colombiano a los carteles de Medellín y Cali durante la década no debe, sin embargo, oscurecer la realidad subyacente de la expansión progresiva de los cultivos de droga y del narcotráfico en Colombia durante la segunda mitad de los noventa. Tampoco debe distraer la atención de la acelerada corrosión política que provino del aún próspero tráfico ilícito del país. En la práctica, más que restringir el auge del tráfico de drogas de la nación, las muertes, extradiciones o encarcelamientos de los "jefes" de los principales carteles crearon sólo interrupciones temporales y relativamente menores en el flujo de contrabando de droga de Colombia a los mercados de Estados Unidos y Europa. De hecho, el vacío que dejó el aniquilamiento parcial de los carteles de Cali y Medellín fue rápidamente llenado por el surgimiento y proliferación de montones de organizaciones de narcotráfico o "cartelitos" por toda Colombia, más pequeñas y menos notorias (aunque igualmente violentas), las cuales se involucraron tanto en el tráfico de cocaína como en el comercio más lucrativo y de veloz expansión de la heroína. A diferencia de los carteles de Medellín y Cali, no obstante, estos nuevos grupos más pequeños han mantenido relativamente bajos perfiles y han operado casi siempre desde bases ubicadas en mu-

chas de las ciudades intermedias o secundarias y pueblos pequeños donde pueden sobornar e intimidar a los oficiales locales con el fin de obtener "protección" para sus actividades en relativo anonimato (Presidencia de la República de Colombia, 1997: 24-25; *Semana*, 1999b; Thomson, 1999).

Aunque es poco probable que planteen amenazas directas a la seguridad nacional similares a las de los carteles de Medellín y Cali a finales de los ochenta y principios de los noventa, el surgimiento de estos nuevos carteles de *boutique* ha presentado nuevos retos, tanto a los oficiales de ejecución de la Ley Antidrogas colombianos como a los estadounidenses, que éstos no han logrado superar de manera efectiva. A pesar de algunos "golpes" recientes y muy publicitados contra los narcotraficantes, tales como la captura del capo Alejandro Bernal (alias "Juvenal") -el sucesor de Pablo Escobar y su organización de Medellín- durante la "Operación Milenio" en octubre de 1999, el tráfico de droga en Colombia continuó prosperando a comienzos del 2000. Sus efectos violentos y corrosivos continúan permeando las instituciones políticas y judiciales de Colombia de manera virtualmente constante y socava con severidad las posibilidades de una reforma económica efectiva en el país (*Semana*, 1999c; Semple, 1999).

La corrupción política en Colombia en realidad precedió al surgimiento del narcotráfico de gran escala en el país. En efecto, está profundamente arraigada en la herencia colonial del país y en los patrones de política elitista, gobierno patrimonial y re-

laciones patrón-cliente a través de los dos siglos que han transcurrido después de la independencia. El narcotráfico y el fenómeno concomitante de violencia criminal y corrupción política que éste produce, se originó en Colombia a finales de los años sesenta y los setenta, en un contexto de débil institucionalización del Estado, ya abundante en corrupción política y clientelismo. La aparición y la expansión de organizaciones criminales transnacionales poderosas involucradas en el tráfico internacional de drogas durante los años setenta y ochenta fueron resultado de -y exacerbaron significativamente- las debilidades institucionales subyacentes del sistema político colombiano. En los años ochenta y principios de los noventa, las enormes ganancias obtenidas por los carteles en Colombia en tráfico ilícito de drogas les permitieron organizar y equipar su propio ejército privado (grupos paramilitares) y sobornar e intimidar a los políticos colombianos y los funcionarios del gobierno en todos los niveles. Como resultado, el sistema de justicia colombiano prácticamente colapso a finales de los años ochenta y principios de los noventa, miembros clave de la Policía y el Ejército eran rutinariamente comprados y cerca del 60% de los miembros del Congreso colombiano recibieron contribuciones ilícitas para sus campañas con el fin de garantizar su cooperación en asuntos cruciales tales como la extradición<sup>1</sup>.

La *élite* empresarial o el (sector privado) también resultó ser vulnerable y cómplice, casi siempre aceptando pagos en efectivo, facilitando operaciones de lava-

1 Para análisis de los problemas de la corrupción institucional en Colombia, véase Roll (1997:117-134); Cepeda (1994,1996a, 1996b, 1997: 99-116).

do de dinero mediante negocios legales, vendiendo propiedades a precios exorbitantes, entre otras. De hecho, durante la década del noventa casi siempre era imposible distinguir claramente entre actividades legales e ilegales del sector privado. Para ilustrar la profundidad del problema, un reporte de febrero de 2000 emitido por la llamada "Comisión de la Verdad" (compuesta por investigadores de varias entidades estatales) sobre corrupción en el sector bancario estatal reveló que durante los últimos diez años cerca de 7.2 billones de pesos habían sido sustraídos sistemáticamente de seis bancos pertenecientes al Estado. Como resultado de este enorme escándalo financiero, se han emprendido más de 1.200 procesos criminales contra banqueros, hombres de negocios, líderes sindicales, congresistas, ex ministros y burócratas de alto nivel. En palabras del actual Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, esta corrupción del sector privado y público "es aún más peligrosa [para el país] que los grupos armados que operan al margen de la ley" (*Semana*, 2000a). De hecho, según *Transparency International*, en 1999 Colombia se posicionó no sólo como uno de los países más violentos, sino como uno de los más corruptos del planeta.

Durante la década del noventa, bajo considerable presión de Estados Unidos, Bogotá logró refrenar, al menos parcialmente, la rampante corrupción y la violencia criminal en aumento producto de los carteles de Medellín y Cali. No obstante, las campañas relativamente exitosas que realizó Colombia en contra de estas dos principales organizaciones criminales de ningún modo eliminó la corrupción rela-

cionada con la droga en el país. De acuerdo con pronunciamientos recientes del gobierno estadounidense,

la corrupción prevaleciente en todos los sectores del gobierno colombiano fue un factor crucial que afectó las operaciones antinarcóticos y ... la corrupción relacionada con la droga en todas las ramas del gobierno continuó socavando la efectividad de las acciones antinarcóticos de Colombia (GAO, 1999c, 2000).

### **Las FARC y el comercio de drogas de Colombia**

Los problemas que enfrentaron las autoridades de ejecución de la Ley Antidrogas que trabajaban en Colombia durante la década estaban compuestos por el creciente involucramiento de la principal organización guerrillera en Colombia -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC- en el cultivo de drogas y en actividades de narcotráfico. El eclipse de los carteles más importantes abrió mayores oportunidades para que el ejército guerrillero de 20.000 hombres de las FARC sacara provecho de la próspera industria de la droga en el país. Lo lograron mediante el cobro de impuestos a los campesinos cultivadores en sus zonas de influencia y a través de la contratación de sus servicios a las organizaciones traficantes para proteger sus cultivos, los laboratorios de procesamiento y las pistas de aterrizaje (*Semana*, 1999d). A finales de la década del noventa una limitada evidencia sugería que unos pocos "frentes" de las FARC pudieron incluso comenzar a operar sus propias instalaciones de procesamiento en áreas remotas del país, aunque no había señales de que hubiera personal de este grupo guerrillero comprometido en actividades internacio-

nales de tráfico de drogas fuera de Colombia (Ambrus y Contreras, 1999; *Reuters*, 1999a). Las altas cúpulas de las FARC continuaron negando las acusaciones sobre la vinculación de la organización con el narcotráfico: "La verdad es que no dependemos de la coca" (García, 2000). Pero el general Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, insistió en que el caso era lo opuesto:

No creo que nadie en Colombia o en el mundo pueda dudar de los vínculos existentes entre el narcotráfico y los grupos rebeldes (The Associated Press, 2000c).

A finales de la década, los cálculos del gobierno colombiano estimaron las ganancias totales de las FARC por el tráfico de drogas en 400 millones de dólares anuales. Agregado a los aproximadamente US\$ 500 millones al año que se cree que las FARC ganan por sus actividades más "tradicionales" (recaudación de "impuestos" revolucionarios a terratenientes, secuestro, extorsión, robo, "comisiones" recogidas de gobiernos y negocios locales, y sus propias inversiones), el ingreso total de las FARC en 1999 pudo haber llegado a los US\$900 millones<sup>2</sup>.

Si bien los ingresos del tráfico de drogas han apoyado financieramente a las FARC, sería un error concluir que el dinero proveniente de las drogas fue en el pasado, o sigue siendo, esencial para la continuidad de la guerra de las FARC contra el gobierno colombiano. En primer lu-

gar, hay una serie de "frentes" de las FARC que nunca han dependido de la "renta" de la coca o la amapola para sostener sus actividades. En segundo lugar, una caída en los ingresos de las drogas se puede suplir, con toda probabilidad, incrementando las ganancias con secuestros, extorsión e "impuestos" revolucionarios a los campesinos, terratenientes, empresarios y multinacionales extranjeras. Por lo tanto, la eliminación de la economía clandestina de la droga en Colombia, si alguna vez ocurriera, no terminaría automática ni inevitablemente la guerra de cuarenta años que ha librado la guerrilla en el país, la cual ha cobrado más de 35.000 vidas sólo en la última década (Reyes, 1999).

Sin embargo, alimentadas en buena parte por ganancias relacionadas con las drogas, las FARC crecieron a paso firme en número y armamento durante la década del noventa. En la segunda mitad de esa década, con frecuencia fueron capaces de derrotar o castigar severamente las fuerzas colombianas en combate. La decisión de la administración Clinton de "descertificar" a Colombia en 1996 y 1997 (principalmente por la supuesta aceptación por parte del presidente Samper de US\$6.1 millones en contribuciones de campaña del cartel de Cali durante su contienda presidencial en 1994) condujo a una reducción sustancial de la ayuda estadounidense a Colombia. Como era de esperarse, estas reducciones contribuyeron al deterioro de la capacidad del Ejército colombiano de combatir a las FARC de manera efectiva. El creciente ta-

2 Es extremadamente difícil obtener información precisa de las ganancias de las FARC como producto de sus actividades con la droga y, por lo tanto, los cálculos varían ampliamente de US\$100 millones a US\$600 millones anualmente. Las cifras presentadas aquí están basadas en entrevistas con informantes expertos realizadas por el autor en Colombia en noviembre de 1999. Para discusiones sobre las fuentes de ingresos de las FARC, véase *Semana* (1999e); Farra (1999); *Agencia EFE*. (1999).

maño y fuerza de las FARC fue, a su turno, un factor clave detrás de la decisión del presidente Pastrana de promover una nueva y ambiciosa iniciativa de paz dirigida a las FARC poco después de su posesión en agosto de 1998.

#### EL PROCESO DE PAZ DEL PRESIDENTE PASTRANA Y LA ZONA DE DESPEJE

Aunque el progreso en estas negociaciones de paz fue terriblemente lento durante los primeros 18 meses de su administración, el presidente Pastrana y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez (alias "Tirofijo") acordaron en noviembre de 1998 establecer una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros (zona de despeje) en el departamento de Caquetá. En efecto, dicho acuerdo obligó a las fuerzas de seguridad del gobierno a retirarse completamente de este territorio (del tamaño de Suiza) en la región de los Llanos Orientales y le prohibió conducir operaciones militares e incluso de inteligencia en el área. La lógica detrás de la creación de la zona de despeje por parte del gobierno Pastrana, fue demostrar sus intenciones pacíficas y facilitar los diálogos de paz con las FARC al crear un área de "distensión" en la cual las negociaciones pudieran llevarse a cabo físicamente<sup>3</sup>.

En la práctica, la zona pronto se convirtió en una especie de santuario para las FARC. Unas 5.000 tropas están estacionadas permanentemente allí y se han vuelto el gobierno *de jacto* en el área. La creciente avalancha de críticas al presidente Pastrana tanto al interior como fuera de Colombia (incluyendo a muchos miembros del

Congreso de Estados Unidos) han denunciado en repetidas ocasiones la creación de la zona de despeje como un signo de que el mandatario le está "entregando" el país a las FARC, al tiempo que está permitiendo la consolidación de una "narcoguerrilla" al interior del territorio nacional. Durante el último año y medio las fuerzas de las FARC que operan en la zona han sido acusadas con frecuencia de violar tanto la letra como el espíritu del acuerdo al ejecutar asesinatos selectivos, albergar víctimas de secuestro, amenazar alcaldes y jueces locales, conducir investigaciones y capturas ilegales, detener civiles inocentes, recaudar dineros públicos, reclutar niños en sus filas, entrenar nuevas tropas y comandos terroristas y construir baterías antiaéreas y otras fortificaciones militares para fortalecer sus defensas. También han sido culpadas de explotar alrededor de 35.000 hectáreas de coca dentro de la zona, comprar hoja de coca a los campesinos de los departamentos circundantes (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo) y venderla directamente a los carteles de la droga, así como de utilizar las 37 pistas de aterrizaje a su disposición dentro de la zona desmilitarizada para llevar por aire la cocaína procesada a prácticamente cualquier parte del país (Ambrus y Contreras, 1999).

Las fuentes de inteligencia de Colombia y EU también creen que las FARC han utilizado la zona de despeje y sus ganancias ilícitas de la coca y otros ingresos para emprender un programa de rearme durante los últimos 18 meses. A mediados de junio de 2000 el general Tapias calculó que durante el último año y medio las FARC

---

3 Para su declaración original de intenciones en relación con el proceso de paz, véase Pastrana (1998); Tokatlian (1999: 339-360).

habían adquirido más de 20.000 rifles de asalto provenientes de Alemania Oriental junto con lanzadores de granada, morteros, misiles antiaéreos SAM-12, equipos sofisticados de comunicaciones electrónicas, y su propia fuerza aérea, pequeña aunque en crecimiento. Desde 1997, tres pilotos estadounidenses que volaban en misiones de interdicción antidrogas sobre el sur de Colombia para DynCorp, una contratista militar privada estadounidense, han muerto en accidentes de avión. A mediados de 1999, un avión DeHavilland RC-7 de la Armada estadounidense dotado de un sofisticado equipo de inteligencia para interceptar comunicaciones por radio y teléfono celular, cayó en las selvas del sur de Colombia mientras realizaba un patrulla]e oficial antinarcóticos de rutina; los cinco tripulantes del Ejército estadounidense que se encontraban a bordo murieron en el accidente. No hay evidencia que indique que las FARC fueron responsables de derribar estos aviones. Sin embargo, se ha reportado ampliamente que las FARC han adquirido suficiente poder armamentista para hacerlo en el futuro. Sólo durante enero de 2000, las FARC dispararon misiles RPG-7 contra aeronaves ocho veces, aunque no se reportaron aciertos (*Agence France Press*, 2000b; *Washington Post*, 1999; *Semana*, 1999f, 1999g; Hammer e Isikoff, 1999).

### **Los paramilitares, los derechos humanos y el tráfico de drogas**

Al igual que sus rivales izquierdistas de las FARC, las fuerzas paramilitares derechistas de Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), conformadas aproximadamente por 7.000 hombres, también se financian, al menos en parte, con impuestos del tráfico de drogas en las áreas bajo su control. En una entrevista televisada

al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a principios de enero de 2000, éste admitió abiertamente por primera vez que sus fuerzas de "autodefensa" basadas en el noroeste de Colombia le cobraban rutinariamente un 40% de impuestos a los campesinos productores de coca. De hecho, los conflictos más sangrientos entre las guerrillas y los paramilitares en Colombia durante la pasada década se han llevado a cabo en regiones ricas en recursos naturales (petróleo, oro o esmeraldas) o en cultivos de drogas (*The Associated Press*, 2000d).

Apoyados por muchos grandes terratenientes, narcotraficantes y segmentos del Ejército, los paramilitares virulentamente anticomunistas han sido primordialmente responsables de oleadas de masacres a civiles que han arrasado a Colombia en la última década. Sólo entre 1998 y 1999 el índice de masacres aumentó al 44%, dejando más de 2.000 civiles colombianos muertos en 1999 (Human Rights Watch, 2000). Sus sistemáticos ataques a civiles sospechosos de ser "simpatizantes", en lugar de las propias guerrillas, provocaron el desplazamiento de casi dos millones de colombianos durante la década del noventa. A pesar de la crueldad de los "paras", el miedo a los rebeldes izquierdistas se ha vuelto tan generalizado que el 60% de los colombianos consultados en una encuesta realizada en 1999 declararon que no apoyaban que se desbandaran los grupos de autodefensa. Además, una mayoría entrevistada en la misma encuesta afirmó que querían que intervinieran tropas estadounidenses porque su propio gobierno era incapaz de protegerlos (Robinson, 1999-2000: 64).

Las FARC, junto con la mayoría de los grupos de derechos humanos dentro y fuera de Colombia, han denunciado en repe-

tidas ocasiones la existencia de instancias de coalición entre los grupos de autodefensa y las fuerzas de seguridad del gobierno durante la última década. De acuerdo con Marulanda, los grupos paramilitares son una expresión oficial de la política estatal. Cuando los paramilitares entran a una zona, las unidades del Ejército en el área usualmente descuidan sus actividades. En múltiples ocasiones, se ha reportado que el Ejército ha proporcionado comunicaciones y apoyo logístico para operaciones paramilitares. A mediados de 1999, cuando un grupo de rebeldes de las FARC atacó y rodeó la sede del líder de las AUC Carlos Castaño, tropas del Ejército se apresuraron a su rescate. Para refutar la opinión del alto comandante sobre la inexistencia de lazos estrechos entre los "paras" y el Ejército, en 1999 las EARC distribuyeron listas de bases de paramilitares, frecuencias radiales utilizadas para comunicarse con unidades del Ejército y los nombres de oficiales que actuaban como mediadores (Human Rights Watch, 1996; revista *Cam-bio*, 1999).

Tales vínculos entre paramilitares y militares indudablemente constituyen enormes impedimentos para cualquier progreso futuro en las actuales negociaciones de paz de Bogotá con las FARC. Consciente de esto, en 1999 el presidente Pastrana relevó a cuatro generales del servicio militar activo por sus conexiones con los paramilitares y envió a uno de ellos a juicio. También completó el desmantelamiento de la

infame Brigada XX (Brigada de Inteligencia) que había sido estrechamente relacionada con bandas paramilitares derechistas durante años, y comenzó el proceso de reorganización y modernización de la inteligencia militar con ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, los lazos persisten y las confrontaciones entre el Ejército y los paramilitares continúan siendo extremadamente escasas (*Reuters*, 1999b; Martínez, 1999).

En reconocimiento de la creciente participación de los paramilitares en el tráfico de drogas y su récord como los peores abusadores de los derechos humanos en Colombia, a mediados de enero de 2000 oficiales del gobierno estadounidense instaron a la administración Pastrana a tomar medidas más enérgicas para eliminar las actividades paramilitares en el país. Según declaraciones públicas de Washington, la eliminación de estos grupos de autodefensa continúa siendo un paso esencial en el camino hacia la paz y el restablecimiento de la ley y el orden en el país (*Agence France Presse*, 2000b)<sup>4</sup>. Por su parte, Castaño sostiene que el gobierno colombiano en últimas tendrá que otorgar amnistía a sus hombres e incluir a las AUC en las negociaciones de paz, o de lo contrario el proceso de paz fracasará (*El Tiempo*, 2000a).

### **El ELN, el EPL, el ERP y la búsqueda de la paz**

La búsqueda de una resolución pacífica del conflicto por parte de la administración

4 En una visita anterior a Washington en marzo de 2000 para hacer *lobby* a los legisladores del paquete de ayuda de Clinton, el Vicepresidente colombiano Gustavo Bell Lemus declaró que siete comandantes de la alta cúpula del Ejército habían sido relevados recientemente de sus cargos por parte de la administración Pastrana por colaborar con los grupos paramilitares de derecha. Así mismo, anunció que siete miembros paramilitares habían sido dados de baja y 42 habían sido capturados por fuerzas del gobierno en los dos primeros meses de 2000 (Gedda, 2000).

Pastrana se ha complicado por la presencia de otros tres movimientos insurgentes armados de izquierda en Colombia. Éstos incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Con aproximadamente 5.000 combatientes, el ELN, de orientación castrotrista, es el segundo grupo rebelde de izquierda en el país. Al igual que las FARC, opera por todo el territorio nacional. Sin embargo, a diferencia de las FARC, el ELN no parece haberse comprometido sistemáticamente en actividades de narcotráfico durante la década del noventa. En cambio, ha financiado sus operaciones principalmente a partir de extorsiones a compañías multinacionales que explotan las áreas petrolíferas de Colombia y volando (50 a 100 veces al año) el oleoducto de 900 kilómetros que transporta crudo de diferentes áreas a lo largo de la frontera con Venezuela a instalaciones portuarias en la costa norte. También ha obtenido sus recursos del pago de rescates (*Semana*, 1999i, 1999j, 1999k).

Desde el comienzo de las negociaciones de Pastrana con las FARC, el ELN buscó participar en el proceso de paz en pie de igualdad. En lugar de incluir al ELN en el diálogo del gobierno con las FARC, sin embargo, el presidente Pastrana optó por tratar con el ELN por separado en un escenario paralelo de diálogos de paz. Si bien estas negociaciones se desarrollaron de manera variable durante los primeros 18 meses, no se alcanzó un progreso sustancial. Adicionalmente, Pastrana se rehusó constantemente a ceder a la demanda del ELN para la creación de una zona de despeje en el norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, similar a la que le otorgó a las FARC en el sur de Colombia,

aunque más pequeña (*El Tiempo*, 2000b; *El Espectador*, 2000).

A mediados de enero de 2000, el ELN efectuó una serie de ataques durante una semana a 28 torres eléctricas en los departamentos de Antioquia y Chocó y dejó el sistema eléctrico del país al borde del colapso. En una entrevista radial en enero 19 de 2000, Nicolás Rodríguez -el comandante de mayor rango del ELN- declaró que su grupo había "perdido la paciencia" con la estrategia de paz del gobierno y prometieron que sus fuerzas continuarían sus secuestros de alto perfil y sus operaciones de sabotaje en señal de protesta. "La clase dirigente sólo escucha la voz de la dinamita y los rifles" (*The Associated Press*, 2000e). Los voceros del Ejército colombiano admitieron francamente que sería virtualmente imposible para las Fuerzas Armadas proteger las 15.000 torres de transmisión eléctrica que están repartidas por toda la nación. Sólo en 1999 los rebeldes izquierdistas dinamitaron 169 torres y causaron pérdidas de US\$13.2 millones a la economía nacional (Baena, 2000a; *El Tiempo*, 2000c; Acosta, 2000a).

Tras estos ataques destructivos a los oleoductos, el gobierno Pastrana reabrió negociaciones con el ELN y aceptó la petición del ELN para la creación de una zona de despeje en el sur de Bolívar donde el ELN pudiera celebrar su convención nacional y comenzar diálogos de paz con el gobierno. Inflexiblemente opuestas a esta concesión al ELN, y decididas a controlar las actividades de producción de coca y oro en el área, a mediados de febrero de 2000 las AUC llevaron a cabo una serie de brutales masacres en las comunidades campesinas asociadas a este grupo guerrillero, dirigidas a evitar la consolidación de una

zona de despeje del ELN en la región. La intensidad y extrema crueldad de la redente campaña militar de las AUC al sur de Bolívar reflejan tanto la profundidad y el grado de resentimiento de su rivalidad con el ELN, como las altas utilidades económicas que subyacen en la lucha entre guerrilleros y paramilitares en la región. A corto plazo, al menos, parecía haber poca probabilidad de que la complicada situación de fondo permitiera a la administración Pastrana avanzar con los planes para crear una nueva zona de despeje al sur de Bolívar. Aún en medio del baño de sangre, sin embargo, los diálogos entre el gobierno y el ELN continuaron en Venezuela<sup>5</sup>.

Por su parte, el EPL, con menos de 500 combatientes, era mucho más pequeño que las FARC o el ELN a finales de los años noventa. Sus principales bases de operación están localizadas en los departamentos nororientales de Cesar, Santander y Norte de Santander cerca de la frontera con Venezuela. Al igual que el ELN, el EPL parece haberse mantenido al margen del tráfico de drogas, y en su lugar se ha concentrado en actividades de extorsión, secuestro y asesinato para financiarse. En los años ochenta el EPL gradualmente fue abandonando su ideología radical maoísta y, a principios de la década del noventa, negoció un acuerdo de paz con Bogotá que condujo al grueso de sus miembros (casi 3.000) a entregar las armas y reinsertarse a la sociedad civil. Los miembros disidentes restantes del EPL, dirigidos por Hugo Carvajal (alias "El Nene"), se negaron constan-

temente a entrar a negociaciones de paz con el gobierno Pastrana. Con la muerte de Carvajal en enero 12 de 2000, como resultado de las heridas recibidas en un combate con tropas del Ejército colombiano el 31 de diciembre de 1999, el papel que el EPL puede cumplir, de tener alguno, en el actual proceso de paz en Colombia sigue siendo poco claro (*Agencia Trance Presse*, 2000c; *Reuters*, 2000b)<sup>6</sup>.

Con únicamente 150 combatientes, el ERP era el más pequeño y el menos conocido de los cuatro grupos guerrilleros aún activos en Colombia a comienzos del 2000. Sus orígenes se remontan a una división dentro del ELN que aconteció en agosto de 1996 durante el Tercer Congreso Ideológico del ELN. Su principal base de operaciones se localizaba en el norte de Colombia, en las áreas de frontera de los departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar. Bajo constante persecución por parte de Carlos Castaño y sus fuerzas paramilitares, especialmente al sur de Bolívar, en 1998 las guerrillas del ERP, con el respaldo del Frente 37 de las FARC, buscaron refugio en la remota región de los Montes de María en el departamento de Bolívar, a lo largo de la frontera con Sucre. Dado su reducido tamaño y su inhabilidad para mantener su territorio lejos de la presión de las AUC, el ERP no ha sido un factor significativo en el cultivo o tráfico de drogas (*Semana*, 2000c).

Después de un prolongado período de inactividad, el ERP resurgió a finales de 1999 -tomando ventaja de la tregua navi-

5 Desde mediados de febrero, las unidades paramilitares han asesinado más de 60 personas sospechosas de simpatizar con el ELN (*The Associated Press*: 2000f; *Semana*, 2000b; Baena, 2000b).

6 El 7 de marzo de 2000, una víctima de secuestro del EPL recientemente liberada anunció a la prensa que este grupo había decidido entrar en diálogos de paz con el gobierno Pastrana (*El Tiempo*, 2000d).

deña entre el gobierno de Pastrana y las FARC- cuando emprendió una serie de "pescas milagrosas" altamente publicitadas a lo largo de la frontera entre Sucre y Bolívar. A mediados de febrero de 2000 las AUC reanudaron sus ataques al ERP con asaltos a varios corregimientos cerca a Ovejas, Sucre, en los cuales murieron cerca de 70 personas. A finales de febrero, los reportes sobre intensos combates entre las AUC y el ERP en la región de Montes de María indicaron que las ofensivas de las AUC continuaron escalando. Al igual que el EPL, el ERP no participó en las negociaciones de paz con el gobierno durante los primeros dieciocho meses de la administración Pastrana, pero sus recientes derrotas en combate contra las AUC puede forzarlo a considerar ingresar al proceso de paz en los meses venideros o enfrentar su aniquilación (*Semana*, 2000c).

Los secuestros para cobrar rescates indudablemente se convirtieron en una de las principales fuentes de financiamiento para los cuatro grupos guerrilleros en los noventa. A comienzos del 2000, las FARC tenían en cautiverio a 850 personas. El ELN tenía a otras 702, el EPL a 200 y el ERP una docena. Durante 1999 las AUC secuestraron 120 personas, lo cual reflejó un incremento de seis veces en sus actividades de secuestro con respecto al año anterior. En 1999 el número total de secuestros reportados en Colombia aumentó a 2.945 casos, comparado con los 2.216 del año anterior (un 33% de intensificación con respecto a los niveles de 1998), con lo cual Colombia rompió su propio récord de secuestros en el mundo (*The Associated Press*, 2000g; *Reuters*, 2000c).

Esta creciente ola de secuestros no sólo complicó los esfuerzos de paz de Pastrana,

sino que también contribuyó a un progresivo éxodo de colombianos de clase media alta y alta que huyeron de su país en conflicto hacia Estados Unidos. De acuerdo con los cálculos del gobierno colombiano, 800.000 personas -el 2% del total de la población colombiana- han abandonado el país en los últimos cuatro años. Sólo en 1999, 366.423 colombianos solicitaron visas de no inmigrantes a Estados Unidos, en comparación con 150.514 en 1997. Casi tres cuartos de las solicitudes de no inmigrantes y más de la mitad de las 11.345 de inmigrantes fueron otorgadas en 1999. Además, aunque aún son pocas en términos absolutos (sólo 334 durante los 12 meses que van del último trimestre de 1998 hasta septiembre de 1999), las solicitudes de asilo político por parte de colombianos también han comenzado a aumentar sustancialmente (396 en el último trimestre de 1999). La tasa de aprobación de solicitudes de asilo también ha aumentado de 19% en 1998 a 46% a finales de 1999 (Rother, 2000).

Actualmente hay, por lo menos, 60.000 a 80.000 colombianos viviendo y trabajando ilegalmente en Estados Unidos que le han pedido a la administración Clinton otorgarles *status* de protección temporal para permanecer en el país legalmente hasta por 18 meses (Traverso, 2000). Tanto Clinton como Pastrana se han opuesto públicamente a un cambio de ese estilo en la Ley de Inmigración estadounidense sosteniendo que, de ser aprobada, precipitaría un éxodo de colombianos aún mayor y, por lo tanto, exacerbaría los serios problemas de "fuga de cerebros" y fuga de capital ya existentes en la nación. Pastrana ha exhortado a sus compatriotas a quedarse en Colombia y a apoyar su iniciativa de paz en lugar de irse. Necesita que trabajen e inviertan en Colombia y paguen sus impues-

tos al gobierno con el fin de tener la oportunidad de reactivar la economía en recesión y restablecer la estabilidad política. Sin embargo, la intensificación de la violencia y la inseguridad tanto en las áreas rurales como urbanas ha llevado a un mayor número de personas a optar por la inmigración. El "movimiento de paz" que crece con fuerza en el país y que en años recientes ha movilizó a millones de colombianos a marchar o a manifestarse a favor de la paz hasta la fecha ha tenido poco impacto real en el ritmo de las negociaciones de paz, así como en la creciente violencia armada y los secuestros que convulsionan a la nación<sup>7</sup>.

### **Violencia, migración interna y catástrofe social**

En los 15 años que transcurrieron entre 1985 y 2000, las guerras internas de Colombia desplazaron cerca de 1.7 millones de colombianos de sus lugares de origen. En 1999, al menos 225.000 personas fueron extraídas de sus hogares, comunidades y de sus medios de sustento por violencia asociada a la política y a las drogas. De éstas, aproximadamente 53% eran mujeres y niños. En contraste con los pocos privilegiados de estratos altos que han logrado inmigrar a Estados Unidos, la vasta mayoría de desplazados de bajos recursos en Colombia está condenada a rondar por el país como emigrantes internos en busca de trabajo, alimento, techo y seguridad. A mediados de 1999 la ONU reportó que la

actual ayuda y otros esfuerzos del gobierno colombiano para asistir a los desplazados "han sido absolutamente insuficientes, lo cual ha causado una deplorable situación de sufrimiento humano" (Kovalesky, 1999; Reuters, 1999c).

Un estudio realizado en 1999 sobre población desplazada en Colombia reveló que los grupos paramilitares son responsables del 47% de los desplazamientos forzados en años recientes. Las guerrillas -especialmente las FARC y el ELN- fueron halladas responsables del 35%. Las fuerzas de seguridad del Estado dan cuenta del 8%, los grupos criminales desconocidos del 7% y los narcotraficantes del 1% (Codhes, 1999).

La mayor parte de los desplazados ha sido forzada a huir de sus pueblos como resultado de incursiones, masacres, amenazas de muerte e incautación de tierras perpetradas por las milicias de ultraderecha o las guerrillas izquierdistas. De hecho, muchos observadores sostienen que tanto los grupos paramilitares como los insurgentes marxistas emplean estrategias de "limpieza" regional sistemática para librar áreas de gente que no los apoya y posteriormente ceder estas tierras abandonadas a sus seguidores o miembros de su familia. Los bombardeos antiguerrilla de la Fuerza Aérea Colombiana y los ataques militares, sin embargo, han sido factores que han complicado significativamente la situación en muchas áreas rurales, al igual que la

---

7 En marzo 11 de 2000, Francisco Santos, periodista del periódico *El Tiempo* y líder del movimiento de paz País Libre que organizó las marchas por la paz en octubre de 1999, en las cuales participaron cerca de 12 millones de colombianos fue forzado al exilio en Estados Unidos después del descubrimiento de un plan de las FARC para asesinarlo. En total, nueve periodistas colombianos han sido asesinados en Colombia por parte de varios grupos armados en los últimos 15 meses, más de trescientos han recibido amenazas de muerte y al menos 11 además de Santos se han ido al exilio (Agence France Press, 2000d).

campaña antidrogas que está llevando a cabo Colombia -particularmente la fumigación aérea de coca y cultivos de amapola- con el respaldo de Estados Unidos (Kovalesky, 1999).

Algunos de los desplazados logran encontrar refugios con familiares en comunidades vecinas, pero con la constante intensificación de la violencia esta "solución" casi siempre los ha dejado expuestos al riesgo de ser desarraigados una segunda e incluso una tercera vez en pocas semanas o meses. Los pocos campos de refugiados establecidos por el gobierno que están disponibles están típicamente superpoblados y frecuentemente vulnerables a tomas violentas de un lado o de otro en los conflictos que convulsionan las áreas rurales de la nación. Decenas de miles de personas no tienen otra alternativa que engrosar las filas de emigrantes rurales que se ven obligados a trabajar en los campos de coca y amapola como "raspachines" cosechando hojas de coca o recogiendo goma de opio de las flores de amapola -el único empleo lucrativo que queda en muchas áreas rurales aquejadas por la violencia (Kovalesky, 1999).

Cientos de miles de otros desplazados han emigrado del campo a las áreas urbanas de Colombia en donde la vivienda, la educación, la salud y el trabajo son escasos, especialmente a causa de la profunda recesión económica del país a finales de los noventa (*El Tiempo*, 2000e). En consecuencia, la mendicidad, la prostitución y la criminalidad en los centros urbanos en Colombia se dispararon en esta década. El caso de Medellín es ilustrativo, ya que después del fin del cartel a principios de los noventa, esta ciudad fue testigo de la proliferación de bandas criminales de jóvenes

-unas 138, según reportes recientes- casi siempre filiadas a organizaciones criminales más grandes (Johnson, 2000c). Bogotá, Cali y otras ciudades principales han sufrido incrementos dramáticos similares en el crimen y la delincuencia común durante la última década (Rother, 1999).

La escalada en la violencia y el desplazamiento masivo de población en el campo también han conducido a miles de campesinos desposeídos a las filas de las guerrillas o los paramilitares. Aunque ambos lados niegan que pagan a sus tropas salarios habituales, sí admiten que realizan pagos de estipendios irregulares a jóvenes empobrecidos de las áreas rurales (o a sus familias) como parte de sus esfuerzos para reclutar nuevos combatientes en sus organizaciones. Los niños de 8 a 10 años de edad son utilizados como espías o exploradores y los adolescentes (tanto niños como niñas) son habitualmente entrenados y dispuestos como combatientes. Algunos simplemente son secuestrados y otros son retenidos, contra su voluntad, a cambio de pagos de "impuestos" o reembolsos de deudas familiares. Pero muchos de los desplazados en Colombia encuentran que unirse a uno u otro bando es su única opción de vida viable que les queda (Johnson, 2000c).

Las guerrillas marxistas frecuentemente organizan sesiones políticas de "toma de conciencia" en las comunidades campesinas en donde ejercen influencia para atraer nuevos adherentes a sus grupos y proporcionan alimentos, asilo, uniformes, armas e incluso educación básica a los jóvenes que se enlistan en sus filas. El adoctrinamiento ideológico marxista es una parte integral del entrenamiento para nuevas incorporaciones. Los paramilitares esgrimen doctri-

nas anticomunistas pero están típicamente menos involucrados con la ideología que los rebeldes. Ellos se valen primordialmente de incentivos materiales y deseos de venganza contra las guerrillas para atraer reclutas. Entrevistas con antiguos insurgentes que han sido capturados por los militares o han desertado rebelan que pocos adolescentes expresan firmes convicciones ideológicas marxistas y que muchos hablan de cambiar de bando -sea de unirse a los paramilitares o a una banda criminal- una vez que sean liberados de la custodia. En resumen, para muchos jóvenes desplazados la decisión de integrarse a la guerrilla o a las milicias es una "escogencia económica racional" dictaminada por el grupo que domina en un área o región particular, más que por un compromiso ideológico. La falta de programas y recursos gubernamentales adecuados para manejar el problema de las masas de desplazados literalmente deja a muchas personas sin ninguna alternativa económica realista. Inclusive si los conflictos internos en Colombia finalmente dieran lugar al establecimiento de una paz formal, las tasas de criminalidad continuarán subiendo vertiginosamente entre los jóvenes y adultos sin educación, desempleados y desadaptados que han sido desarraigados forzosamente de sus hogares y familias e irreparablemente traumatizados por la violencia que han tenido que enfrentar (Johnson, 2000c; Prieto San Juan, 1998: 39-68).

### **Los conflictos internos en Colombia y la seguridad regional**

La iniciativa de paz del presidente Pastrana también se ha visto obstaculizada por las crecientes repercusiones de los conflictos internos de la nación a los países aledaños. Las guerrillas, los paramilitares y narcotra-

ficantes colombianos actualmente suelen cruzar los territorios vecinos de Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador para refugio seguro, reservas, tráfico de armas y narcotráfico. Los incidentes de secuestros y asesinatos transfronterizos también han aumentado dramáticamente en años recientes. Y miles de campesinos desplazados han buscado protección al otro lado de las fronteras en Venezuela y Panamá.

Después que el presidente Hugo Chávez asumiera la presidencia en Venezuela en febrero de 1999, las relaciones colombo-venezolanas se deterioraron rápidamente. Chávez acusó inmediatamente a Colombia de no ser capaz de controlar sus fronteras apropiadamente y luego anunció que abriría negociaciones con las FARC directamente en lugar de esperar resultados del frágil proceso de paz de Pastrana. Dada su retórica populista, antiestablecimiento y vagamente "revolucionaria", algunos observadores en Colombia temían que inclusive podría brindarle apoyo clandestino a las FARC u otorgarle *status* de beligerancia. Aunque en la práctica Chávez no realizó ninguna de estas acciones durante 1999, las relaciones bilaterales entre los dos vecinos se mantuvieron tensas e incómodas a comienzos de 2000 (*Semana*, 1999; *El Nuevo Herald*, 1999a; Reyes, 1999).

Aunque han sido menos públicas, han surgido tensiones similares en las relaciones bilaterales con Brasil, Perú y Ecuador durante el último año y medio. En 1999, tanto Brasil como Perú enviaron refuerzos militares similares a sus fronteras con Colombia para fortalecer sus defensas contra incursiones transfronterizas. Al ser la primera ruta de tráfico de armas y de drogas dentro y fuera de Colombia y zona clave

de conflicto entre las FARC y las AUC, la frontera entre Colombia y Panamá fue la más polémica de las relaciones bilaterales en 1999. La salida de tropas estadounidenses de la Zona del Canal a finales de año y la capacidad militar limitada de la Policía Nacional de Panamá originó serios cuestionamientos sobre la futura seguridad del propio canal (Bagley, 1999).

La incapacidad del Ejército colombiano de asegurar sus fronteras hace que los esfuerzos de Pastrana para contener el tráfico de drogas y lograr un acuerdo de paz con las guerrillas en Colombia sean considerablemente más problemáticos, pues tanto los traficantes como los insurgentes claramente se han convertido en actores transnacionales más allá del control efectivo de Bogotá. Como resultado, durante 1999 las preocupaciones de Washington con respecto a las crecientes amenazas a la seguridad regional por parte de Colombia se incrementaron dramáticamente, y en últimas, condujeron a que la administración Clinton propusiera mayores aumentos en la asistencia de Estados Unidos dirigidos a reforzar la capacidad de la administración Pastrana para manejar los problemas de Colombia<sup>8</sup>.

### **Narcotráfico, guerrilla y relaciones colombo-estadounidenses**

Ya profundamente preocupado con el aumento vertiginoso de la producción y tráfico de drogas, el incremento de la violencia guerrillera y paramilitar y el deterioro

de las condiciones políticas y económicas de Colombia, el 1º de marzo de 1998 Washington optó una vez más por "certificar" a Colombia como "país cooperador" en la guerra estadounidense contra las drogas por primera vez desde 1994. En 1995, la administración Samper había sido "descertificada", pero la administración Clinton le otorgó un "certificación por seguridad nacional" que permitió la continuación de la ayuda estadounidense a Colombia. En 1996 y 1997 el gobierno de Samper fue descertificado totalmente y el flujo de ayuda estadounidense fue severamente reducido (a excepción de la Policía Nacional). Aunque Clinton no impuso finalmente sanciones al comercio en Colombia como la legislación estadounidense autoriza en casos de descertificación, el uso de "diplomacia coercitiva" o "chantaje" diplomático por parte de Washington durante este período, ejerció un efecto de profundo congelamiento de toda la actividad de negocios y flujos de inversión extranjera desde 1996 en adelante (Bagley, 1998:103-118).

En combinación con el retraso económico global, la profundización en las recesiones en Venezuela y Ecuador y el manejo económico y político clientelista y populista de Samper durante su período, la descertificación ayudó a conducir a la economía de Colombia, entre 1997 y 1998 hacia un despeñadero del cual aún no se ha recuperado. De hecho, en 1999 Colombia experimentó su peor recesión económica en setenta años, ya que la economía se contrajo en casi el 6%, mientras que los nive-

8 Aunque los oficiales de alto rango de Estados Unidos alimentaron las expectativas de un mayor paquete de ayuda de EU durante la segunda mitad de 1999, las discusiones partidistas y las intensas disputas alrededor de prioridades presupuestales entre los republicanos y los demócratas del Congreso condujeron a posponer la solicitud de ayuda inicial en el Congreso de Estados Unidos a finales de 1999 (Shifter, 2000: 51).

les de desempleo alcanzaron el 18% (Orrego, 1999: 5B; *Semana*, 1999m, 1999n). La severidad de la presente crisis económica en Colombia y el descontento popular generalizado causado por ésta fueron dos factores que generaron los problemas de criminalidad común y gobernabilidad enfrentados por el presidente Pastrana durante su primer año y medio de gobierno, al tiempo que ha alimentado y fortalecido a las guerrillas del país. Las acciones de la guerrilla -secuestros, sabotaje a la infraestructura, escalada del conflicto armado- a su turno, han exacerbado y prolongado el actual descenso en la economía del país (*Semana*, 2000c, 2000d).

A principios de 1998, la situación de deterioro en Colombia se había vuelto tan preocupante para las autoridades estadounidenses que, a pesar del hecho de que el sombrío período de cuatro años del presidente Samper no estaba programado para terminar hasta agosto de 1998, de todas maneras Washington procedió a "recertificar" a Colombia el 1° de marzo. Esta decisión despejó el camino para que la administración Clinton otorgara US\$289 millones en ayuda antinarcóticos a Colombia en el año fiscal de 1999, una suma que inmediatamente catapultó a este país a la posición del tercer receptor de ayuda estadounidense en el mundo, sólo después de Israel y Egipto. Dado que el año fiscal de Estados Unidos no comienza sino hasta octubre 1° de cada año de calendario, los

nuevos fondos de ayuda estadounidense comenzaron a entrar a Colombia sólo a finales de 1998 (bastante después que el presidente Pastrana asumiera la presidencia el 7 de agosto). Este margen de tiempo aseguró que el gobierno Samper no recibiera beneficios directos de] aumento en la ayuda de Estados Unidos en el año fiscal de 1999<sup>9</sup>.

Tan pronto como Pastrana asumió la presidencia, las relaciones bilaterales colombo-estadounidenses se mejoraron rápidamente. En octubre de 1998, el presidente Clinton recibió al presidente Pastrana en una visita de Estado a Washington, con lo cual claramente marcó el contraste con el anterior presidente Samper, a quien oficialmente se le había negado la visa para viajar a Estados Unidos en 1996. A pesar de ser escéptica, la administración Clinton públicamente respaldó las propuestas de paz de Pastrana hacia las FARC a finales de 1998. En efecto, a petición del presidente Pastrana, la administración Clinton inclusive estuvo de acuerdo en enviar emisarios para sostener encuentros secretos con los representantes de las FARC en Costa Rica en diciembre de 1998 para discutir la voluntad de las FARC de emprender programas de erradicación de drogas como parte del proceso de paz. Sin embargo, una vez fueron reveladas públicamente a la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, estas conversaciones secretas causaron tanta controversia en Was-

---

9 Los US\$228 correspondían a tres veces la cantidad de ayuda que Colombia había recibido de Estados Unidos en el año fiscal de 1998 durante el último año del gobierno de Samper. Durante esta administración, prácticamente todo el flujo reducido de ayuda antinarcóticos de Estados Unidos a Colombia fue canalizado a través de la Policía Nacional encabezada por el general Rosso José Serrano, más que mediante el Ejército, el cual fue percibido por las autoridades estadounidenses como corrupto y profundamente involucrado con abusos de los derechos humanos (GAO, 1998,1999d).

hington que la administración Clinton se vio obligada a desautorizarlas y a comprometerse a abstenerse de cualquier discusión futura con los "terroristas" de las FARC (El *Nuevo Herald*, 1999b)<sup>10</sup>.

La administración Clinton continuó respaldando la iniciativa de paz de Pastrana durante 1999 en su diplomacia pública. Sin embargo, en la medida en que el proceso de negociaciones se empantanaba mes tras mes, los formuladores de política clave en Estados Unidos claramente llegaron a la conclusión de que las FARC nunca negociarían seriamente, a no ser que fueran obligadas a hacerlo tras su derrota en el campo de batalla. Indicando un cambio importante, en marzo de 1999, Washington acordó comenzar a cooperar con inteligencia en tráfico de drogas y actividad guerrillera con el gobierno Pastrana y el Ejército colombiano, incluyendo los datos obtenidos de observaciones satelitales de la zona de despeje (Albright, 1999; *Reuters*, 1999c: A15).

A mediados de 1999, más de 300 estadounidenses estaban apostados en Colombia: 22 entrenadores y asesores y más de 100 operativos de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de la Central Intelligence Agency (CIA). El control de drogas continuó siendo la prioridad política declarada de Estados Unidos en Colombia. La misión primordial de Estados Unidos era entrenar y equipar un batallón

antinarcóticos nuevo de 950 hombres en el Ejército colombiano (*Semana*, 2000e).

Pero el estancamiento en el proceso de paz y los reveses que sufrió el Ejército en combate contra las FARC durante 1998-1999, combinados con la creciente evidencia de los vínculos de este grupo guerrillero con el tráfico de drogas, forzaron a Washington a aceptar que la guerra contra las drogas ya no podía ser claramente distinguida de la lucha contra la guerrilla. Con el impulso de Washington, en septiembre de 1999 el gobierno Pastrana emitió el documento del "Plan Colombia", en el cual exponía su estrategia general para manejar los múltiples problemas que aquejan al país, que van del narcotráfico, la violencia política, crisis humanitaria y recesión económica hasta la corrupción institucional. El precio del plan era de US\$7.5 billones durante un período de tres años, de los cuales Colombia prometió aportar US\$4 billones. Se esperaba que Washington suministraría de US\$1.5 a US\$2 billones y que el monto restante provendría de instituciones financieras multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID) y la Unión Europea (Presidencia de la República, 1999)<sup>11</sup>.

Después de no lograr promover una respuesta más temprana a través del Congreso estadounidense a finales de 1999, el 11 de enero de 2000 la administración Clinton presentó un nuevo proyecto de ley al Congreso de Estados Unidos por un pro-

10 El asesinato de tres estadounidenses defensores de los derechos humanos, realizado por las FARC, ocasionó la impensable reactivación de los contactos entre los diplomáticos estadounidenses y esta guerrilla.

11 Claramente indicando que su pretensión primordial era convencer a Estados Unidos de apoyar al gobierno Pastrana, el Plan Colombia fue inicialmente escrito en inglés y circuló primero en Washington antes de estar disponible en español para el Congreso de la República de Colombia, en Bogotá.

grama de ayuda de emergencia de US\$ 1.28 billones para Colombia. Pensado para ayudar a Bogotá a luchar contra el tráfico de narcóticos en aumento y para afianzarla democracia durante los siguientes dos años, cerca de la mitad del dinero estaba incluido como una solicitud de presupuesto suplementaria para el año fiscal de 2000. La otra mitad fue incorporada en la propuesta de presupuesto de Clinton al Congreso para el año fiscal de 2001 presentada en febrero 7 de 2000. Agregada a los US\$ 300 millones previamente asignados para Colombia en el presupuesto del año fiscal de 2000, la ayuda total a Colombia en los próximos dos años alcanzará cerca de US\$1.58 billones, casi doblando la cantidad aportada durante toda la década de los noventa (Albright, 2000; The White House, 2000).

En efecto, con esta nueva propuesta de ayuda la administración Clinton reveló un cambio dramático en la estrategia de Estados Unidos hacia Colombia. En 1999, al igual que en años anteriores, virtualmente toda la ayuda antinarcóticos de Washington había sido canalizada hacia la Policía Nacional y no hacia el Ejército. El nuevo paquete, en cambio, asignaba el grueso de la futura asistencia estadounidense a las fuerzas armadas colombianas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), mientras que reducía substancialmente los flujos de ayuda a la Policía. Del total de US\$1.573 billones a ser aportados durante los próximos dos años, casi dos tercios -US\$940 millones- se destinarán a la fuerza militar, *versus* US\$96 millones para la Policía. Para garantizar entrenamiento, equipos y la compra de 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey para dos nuevos batallones antinarcóticos, se proyecta que el Ejército recibiría US\$599 millones (US\$512 millones en el año fiscal de 2000 y 88 millones en el

2001). Para las actividades de interdicción la Fuerza Aérea y la marina recibirán US\$ 341 millones (US\$238 en el año fiscal de 2000 y 103 millones en el 2001) (Gómez Maseri, 2000).

Mientras que el Consejero de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca, Arturo Valenzuela, señaló que la nueva ayuda estadounidense no tenía "nada que ver" con la lucha contra la guerrilla, el zar antidrogas Barry McCaffrey admitió más directamente que el dinero haría una "importante contribución" a la lucha antisubversiva en Colombia. En la práctica, los continuos esfuerzos retóricos de Washington para mantener una estricta división entre la ayuda antinarcóticos y las operaciones antiguerrilla son falsos y fútiles. La realidad colombiana actual simplemente no se presta para hacer este tipo de distinciones. De hecho, durante su viaje a Washington a finales de enero de 2000 para apuntalar el apoyo del Congreso de Estados Unidos al paquete de ayuda del presidente Clinton para Colombia, el presidente Pastrana reconoció abiertamente que en la medida en que las FARC estén "en el negocio", los fondos y equipos antinarcóticos de Estados Unidos se usarían contra las guerrillas (Torres de la Llosa, 2000).

### **Implicaciones del cambio en las prioridades de la política estadounidense**

En el fondo, la administración Clinton se ha preocupado últimamente más por la estabilidad de la democracia colombiana y las implicaciones de un potencial colapso del Estado colombiano para la seguridad regional que por el control antidrogas *per se*, aunque los dos obviamente están estrechamente entrelazados. En efecto, a media-

dos de enero de 2000 la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, particularizó a Colombia, junto con otros tres países (Nigeria, Indonesia y Ucrania) como merecedores de atención especial, dado que "cada uno de ellos puede ser una fuerza de gran importancia para la estabilidad y progreso de su región y cada una es un punto crítico en el camino de la democracia" (*Reuters*, 2000d: A20). De hecho, Colombia es hoy en día vista en Washington como el país "problema" en el hemisferio occidental y, como tal, ha surgido como el principal punto focal de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en 2000.

Mientras que esta elevada atención por parte de Washington casi siempre está acompañada por recursos que se necesitan urgentemente, la experiencia acumulada indica que también implica típicamente una mayor "condicionalidad" y una participación creciente de Estados Unidos en los asuntos domésticos del país en cuestión. El caso colombiano no será la excepción. En primer lugar, Washington ha estipulado que la mayor parte de la asistencia estadounidense sea usada para operaciones de control de drogas en el sur del país, donde se cultivan dos tercios de los cultivos de coca y donde las FARC son más activas en la protección de los campos, los laboratorios de procesamiento y las pistas de aterrizaje. La intensificación del conflicto del gobierno con las FARC parece ser un resultado inevitable del mandato que Estados Unidos le hizo a Bogotá.

En segundo lugar, la administración Clinton está profundamente consciente de la pasada vinculación de las fuerzas militares de Colombia en abusos de los derechos humanos, y ha atado la ayuda de

Estados Unidos directamente al monitoreo permanente de las actividades de los nuevos batallones antinarcóticos y a la certificación estadounidense de que no se presente ningún vínculo de la Policía o el Ejército con grupos paramilitares. En efecto, US\$93 millones están explícitamente destinados en la nueva propuesta de presupuesto a fortalecer los derechos humanos, la administración de justicia y la democracia en Colombia (US\$45 millones en el año fiscal de 2000 y 48 millones en el 2001). Consciente de la probabilidad de un mayor escrutinio del récord de derechos humanos de sus fuerzas armadas en orden de batalla, durante un viaje a Washington (el cuarto en los primeros 18 meses de su presidencia) a finales de enero de 2000, Pastrana explícitamente pidió que la ayuda no estuviera ligada a los derechos humanos.

Sabemos que aún tenemos muchos problemas ... [pero] no creo que sea bueno para la ayuda tratar de poner todo tipo de condiciones en ella (Golden, 2000).

A pesar de las preferencias de Pastrana, varios demócratas en el Congreso como el senador Patrick J. Leahy (Vermont) parecían decididos a presionar para poner tales condiciones.

No quiero que en la guerra contra las drogas cometamos el mismo error que tuvimos en la guerra fría, donde aportamos dinero ... sin tener en cuenta sus récords de derechos humanos con tal de que fueran anti-comunistas (Golden, 2000; *The Associated Press*, 2000h).

En tercer lugar, Washington ha estipulado, un poco contradictoriamente, que todas las operaciones de las nuevas unidades antinarcóticos de Colombia finan-

ciadas por Estados Unidos deben relacionarse directamente con las misiones de control de drogas y no con las acciones generales antiguerrilla. Sin embargo, el no cumplimiento con casi total seguridad va a provocar intensos debates políticos dentro del Congreso de Estados Unidos y potencialmente puede conducir a la negación de ayuda estadounidense futura. El salto cuantitativo en la ayuda total estadounidense en el 2000 y la consecuente condicionalidad, en efecto, convierten a las acciones militares de Colombia en un asunto "interméstico" (tanto internacional como doméstico) en el sistema político estadounidense en una mayor medida de lo que había sido en el pasado (*Semana*, 2000f.).

Finalmente, los oficiales estadounidenses han presionado para que Colombia incremente sus esfuerzos de erradicación de cultivos de coca y amapola. En señal de acatamiento, el 21 de enero de 2000 la Policía Nacional de Colombia se comprometió a expandir su campaña de fumigación aérea con herbicidas de las 40.000 hectáreas eliminadas en 1999 a 80.000 en el 2000. Un total de US\$145 millones se enmarca en el nuevo paquete de ayuda para proyectos de desarrollo alternativo durante los próximos dos años (US\$92 millones en el año fiscal de 2000 y 53 millones en el 2001). Si se cumplen, sin embargo, estas ambiciosas metas de fumigación probablemente desplazarán decenas de miles de campesinos cultivadores de coca en regiones dominadas por las FARC en el sur, impondrán un considerable sufrimiento humano en el proceso y provocarán protestas cívicas

masivas en contra del gobierno Pastrana. Aunque la intención de esta política es claramente debilitar a las FARC mediante la reducción de sus ingresos provenientes del cultivo de coca, el resultado no intencionado bien puede ser fortalecer el movimiento de la guerrilla, al inducir a miles de campesinos víctimas de la pobreza y el resentimiento a incorporarse a sus rangos<sup>12</sup>.

Las cifras de entrenadores consejeros militares estadounidenses, agentes de la DEA, operativos de la CÍA y personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en Colombia pueden elevarse substancialmente junto con el aumento en los flujos de ayuda de Estados Unidos durante los próximos años. A la luz de las pasadas experiencias amargas en Vietnam, prácticamente la probabilidad de que Washington envíe tropas de combate estadounidenses a luchar en Colombia en el futuro cercano es nula. Sin embargo, el cambio en la estrategia estadounidense en este momento indica indudablemente que Washington ya no está atacando los carteles de la droga en Colombia tanto como lo está haciendo con la "narcoguerrilla" en aumento en el país. La posibilidad de que algunos militares y/o funcionarios estadounidenses sean asesinados a medida que la lucha se intensifique es bastante real y seguramente ocasionará que el tema colombiano se incluya en los debates políticos domésticos de EU (Sweeny, 1999; Tokatlian, 2000b: 13-15; Marcella y Schultz, 2000: 3-22).

Enfatizando esta posibilidad, a finales de febrero de 2000 el comandante de las

---

12 Sobre los efectos de los programas de erradicación de coca en Colombia, ver Younger (1997) y Tokatlian (2000).

FARC, Raúl Reyes, afirmó que su organización percibía el paquete de ayuda estadounidense como nada más que una declaración de guerra sutilmente disfrazada por parte de Washington a las FARC. Él, a su turno, le declaró la "guerra" a Estados Unidos y juró que las FARC lucharían contra la intervención extranjera en Colombia (*Reuters*, 2000e; *The Associated Press*, 2000i). Para evitar exponer el personal militar estadounidense y arriesgar las protestas domésticas que inevitablemente sobrevendrían, Washington puede optar en cambio por la bien establecida práctica de negocios privados conocida como *out-sourcing*. Esta estrategia involucraría emplear contratistas civiles (muchos de los cuales son oficiales estadounidenses antiguos) para apoyar su programa de ayuda en lugar de aumentar abruptamente los niveles de personal militar estadounidense. Aunque quizá es conveniente desde el punto de vista de Washington, las organizaciones de derechos humanos tales como Amnistía Internacional advierten que dicha estrategia genera serios cuestionamientos en términos de responsabilidad:

el Departamento de Defensa en sí mismo, en su entrenamiento, tiene que cumplir con ciertos lineamientos de derechos humanos porque están obligados por la ley a hacerlo. Pero no es claro hasta qué punto se extiende dicho mandato cuando estamos hablando de actores privados esencialmente (Brigs, 2000).

Tanto Bogotá como Washington preferirían obviamente que las FARC reaccionaran acelerando el ritmo de las negociaciones de paz y acabando con sus vínculos con el tráfico de drogas. De acuerdo con una encuesta reciente patrocinada por *El Tiempo* en Bogotá, el 70% de todos los Co-

lombianos está a favor de los aumentos que se planean en la ayuda de EU a su país. Pero menos de la mitad cree que la ayuda servirá para reducir los niveles del conflicto armado. El escenario más probable, de acuerdo con la mayoría de los encuestados, es el del escalamiento del conflicto entre las FARC y el Ejército colombiano, al menos en el futuro previsible. De hecho, la mayoría de los analistas creen que es posible que las FARC respondan con una nueva gran ofensiva que incluirá sabotaje intensificado de la infraestructura, aumento en los secuestros y asesinato y movilizaciones campesinas masivas para protestar por el fortalecimiento de los programas de erradicación de coca y amapola (*El Tiempo*, 2000f).

## CONCLUSIONES

La lógica implícita de la nueva estrategia de Estados Unidos es forzar a las FARC a negociar seriamente con el gobierno Pastrana, demostrándoles en el campo de batalla que tienen más que ganar con un acuerdo de paz que con la continuación de la guerra. Que esta estrategia vaya a funcionar está bastante puesto en duda. Lo que no debe dudarse es que el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos pondrá en escena una época más sangrienta y violenta en los conflictos internos de Colombia durante los últimos años. Además, sería un error creer que la presente propuesta de ayuda de dos años será suficiente para bajar la marea. Si la estrategia tiene alguna posibilidad de funcionar, Washington tendrá que sostener sus elevados niveles de fondos para Bogotá durante la mayor parte de la próxima década y deberán encontrarse donantes adicionales (probablemen-

te en Europa) para complementar los compromisos de Estados Unidos<sup>13</sup>.

Aún asumiendo flujos sostenidos de ayuda estadounidense y europea, muchos críticos permanecen escépticos con respecto a los prospectos de acabar la violencia política y el tráfico de drogas en Colombia con la estrategia asumida actualmente por Bogotá y Washington. En blanco y negro, los críticos pueden dividirse en dos grupos o campos básicos. Por un lado, hay una "línea dura" que sostiene que las FARC están tan profundamente involucradas en (y tan bien financiadas por) el tráfico de drogas y otras actividades ilegales que nunca acordarán una negociación de paz que las obligue a deponer las armas y renunciar a sus fuentes ilícitas de ingresos. La lógica de esta línea lleva a la conclusión de que las FARC primero tendrán que ser derrotadas militarmente en una guerra antisubversiva prolongada antes que la paz pueda ser restablecida o el cultivo de drogas pueda ser debilitado en Colombia. Washington debe reconocer esta realidad, sostienen los partidarios de la "línea dura", "primero declarando la primacía absoluta de la guerra contra los comunistas, en vez de la guerra contra las drogas".

Desde esta perspectiva, la insistencia de Washington en distinguir entre operaciones antidrogas y antiguerrilla se considera

artificial y frustrante. Además, atar la ayuda estadounidense al respeto por los derechos humanos y a la eliminación de vínculos del Ejército y la Policía a los grupos paramilitares sólo incapacitará a las fuerzas de seguridad, al tiempo que dejará libres a las guerrillas para operar sin dichas trabas. En el análisis final, el escepticismo de los partidarios de la "línea dura" surge de su creencia en que las Fuerzas Armadas de Colombia no serán capaces de derrotar a las guerrillas, aún con la ayuda de Estados Unidos, si Washington insiste en manejar a nivel micro los esfuerzos de la lucha.

Entre los que defienden la "línea dura" hay importantes diferencias en énfasis que no pueden pasarse por alto. Algunos dudan que inclusive con el respaldo de Estados Unidos la élite colombiana efectivamente posea la voluntad de luchar.

¿Por qué enviar un sólo dólar, para no hablar de un soldado estadounidense, para apoyar a un ejército en el cual no se necesita un diploma de bachiller para prestar servicio? ¿Acaso el gobierno colombiano -débil, corrupto e inconstante- merece nuestra ayuda para sobrevivir? (Peters, 2000:B01).

El punto básico de este argumento es que -como lo reveló Vietnam- ninguna ayuda estadounidense salvará un régimen incapaz de salvarse a sí mismo. Puede ser-

13 Cuando fue presionado por congresistas escépticos durante su testimonio sobre el paquete de ayuda de Clinton ante el subcomité de la Casa de Apropiedades que vigila la ayuda externa, el Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, el general Barry McCaffrey, respondió: "Yo personalmente creo que tenemos que pensarlo como un esfuerzo de cinco años". Para entonces, afirmó, habría "reducciones substanciales en la producción de drogas". Algunos de sus críticos en el subcomité expresaron temores de que la propuesta conduciría a Estados Unidos hacia otra intervención al estilo de Vietnam y otros señalaron que los fondos podrían ser mejor utilizados en Estados Unidos en el control a la demanda de drogas en ese país (Fram, 2000). Sobre las dificultades para obtener recursos de la Unión Europea ver Corral (2000).

vir sólo para prolongar el "terrible" *statu quo*.

El resultado no deseado de nuestra ayuda puede ser fortalecer el actual sistema lo suficiente como para preservar todas sus peores características y manteniendo el balance de males (Peters, 2000: B01).

Tales dudas no necesariamente conducen a los adeptos de la "línea dura" a rechazar la necesidad del actual paquete de ayuda de Clinton. De hecho, aún los más cautelosos creen que la ayuda debe enviarse para otorgarle al gobierno Pastrana una "última" oportunidad para demostrar su voluntad y capacidad de "rescatar" a Colombia de los terroristas y narco guerrillas de toda clase. Si Bogotá responde de manera efectiva, está bien. Sin embargo, si no lo hace, debe tenerse la mayor precaución de que Estados Unidos no despliegue tropas de combate para luchar en las batallas de Colombia.

Debemos tener cuidado del síndrome Saudita, en el cual regímenes extranjeros completamente inmerecidos nos manipulan para librar la pelea por ellos (Peters, 2000: B01).

Si Bogotá se niega a fundar su propia defensa, Washington no debe asumir la responsabilidad. En dicho escenario, la mejor alternativa, como algunos -aunque ciertamente no todos- creen, sería permitir que el actual gobierno corrupto, oligarca y moralmente arruinado colapse en lugar de postergar la agonía de su muerte al costo de vidas estadounidenses. Tras dicho colapso, admiten, Estados Unidos puede terminar teniendo que luchar en Colombia para proteger sus intereses estratégicos de todas maneras. Sin embargo, señalan, Washington puede hacerlo como parte de

un consenso regional sobre la necesidad de intervención y como miembro de una coalición para pelear en apoyo de un nuevo régimen "digno" en lugar de sostener artificialmente beneficiarios "indignos" (Peters, 2000: B01).

Por otro lado, existe una "línea reformista" que afirma que los conflictos internos actuales del país nunca serán resueltos para siempre, a menos que Bogotá primero emprenda profundas reformas socioeconómicas y políticas diseñadas para solucionar las evidentes inequidades en la sociedad colombiana y democratizar su sistema político corrupto, elitista y excluyente. Desde esta perspectiva la actual estrategia de Estados Unidos no refleja ni un plan realista para luchar contra las drogas ni un programa viable a largo plazo para la restauración de la paz y la estabilidad.

Washington debió haber aprendido desde hace tiempo que una relación con un ejército latinoamericano abusivo e ineficaz rara vez produce resultados positivos y casi siempre amenaza la democracia en la región (*The New York Times*, 2000).

Dejando a un lado la retórica estadounidense, los reformistas piensan que el paquete de ayuda de Washington está extremadamente sesgado hacia soluciones militares y dedica demasiados pocos recursos a la "construcción institucional" y la reforma económica estructural. Los partidarios de la reforma no ignoran la necesidad de reorganizar y fortalecer las fuerzas armadas colombianas. Pero subrayan la crucial importancia de una estricta observancia de los derechos humanos por parte del Ejército de romper vínculos entre las fuerzas del gobierno y los paramilitares, en lugar de equiparlos para librar una guerra

prolongada contra la subversión. También enfatizan la necesidad fundamental de eliminar la impunidad militar mediante la subordinación de personal militar al escrutinio y las sanciones judiciales civiles. Esto, a su vez, requerirá que Washington y Bogotá asignen una mayor prioridad y más fondos a la reforma de un sistema judicial colombiano debilitado. De acuerdo con esta lógica, los US\$45 millones en el 2000 (US\$48 millones en 2001) designados para fortalecer los derechos humanos, la administración de justicia y la democracia son funestamente inadecuados y brindan un indicador revelador de las prioridades trastocadas que contiene la actual propuesta de ayuda de la administración Clinton.

Igualmente reveladores son los niveles comparativamente bajos de recursos (US\$ 145 millones) designados para programas de desarrollo alternativo. Si se llevan a cabo, el compromiso de Colombia de destruir 80.000 hectáreas de coca en el 2000 inevitablemente desplazará cientos de miles de campesinos de las zonas de cultivo de coca en el sur del país. Los recursos de ayuda contemplados en la actual propuesta de presupuesto ante el Congreso de Estados Unidos simplemente no serán suficientes para abordar el problema de la nueva población desplazada y mucho menos para manejar las dificultades de casi dos millones de colombianos que han sido dislocados previamente durante los últimos quince años de conflicto. Adicionalmente, la prioridad dada al Ejército colombiano deja poco o nada para los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo que se necesitan con tremenda urgencia, al igual que inversión en carreteras, puentes, escuelas y facilidades de salud pública. En lugar de alejar al campe-

sinado colombiano del cultivo de coca, la presente estrategia tiene mucha mayor probabilidad de expandir la producción de coca hacia la vasta frontera agrícola de los Llanos Orientales de Colombia, la región amazónica y más profundamente en Brasil y otros países vecinos. Al mismo tiempo, al menos cierta parte de la población campesina colombiana que se encuentra cada vez más desesperada probablemente engrosará las filas de las FARC, otros grupos guerrilleros y los paramilitares.

Si bien generalmente adoptan un enfoque de política estadounidense más "orientada al desarrollo" hacia Colombia, algunos reformadores también hacen gran énfasis en la necesidad de que Washington gaste más dinero en reducir la demanda de Estados Unidos, mientras que otros no. Dichos críticos sostienen que Estados Unidos ha asignado consistentemente muy pocos recursos para tratamientos de prevención, educación, y rehabilitación en su propio país.

Sólo compárese la solicitud de US\$1.6 billones por parte de Colombia durante un período de 18 meses con los US\$2 billones para toda la prevención y tratamiento en el presupuesto propuesto para 2001..." Francamente, será mucho más valioso para la salud de Estados Unidos gastar dinero domésticamente que en helicópteros Blackhawk... (Seattle Post-Intelligencer Editorial Board, 2000).

Evidentemente, la actual estrategia hacia Colombia no satisface de lleno ni a los de "línea dura" ni a los reformistas. En efecto, lo que busca es no tomar partido por ninguna de las dos opciones. La guerra contra las drogas sigue siendo la prioridad formal y el monitoreo a los derechos humanos una condición para la ayuda de Es-

tados Unidos. Sin embargo, el grueso de la asistencia estadounidense será canalizada a través del Ejército colombiano en vez de ser dedicada a reformas socioeconómicas e institucionales. Esta estrategia de "dos opciones" puede incluso ser capaz de sostener el régimen político al menos durante los próximos años, pero es poco probable que genere una paz duradera o una estabilidad política permanente en la década venidera.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Luis Jaime. "Colombia sufre pérdidas incalculables por los atentados", *EZ Nuevo Herald*, 22 de enero de 2000.
- Agence France Press. "Existe un complot para matarme", *El Nuevo Herald*, 13 de marzo de 2000.
- . "Guerra total a paramilitares", *El Nuevo Herald*, 15 de enero de 2000b.
- . "Aseguran que las FARC poseen un poderoso arsenal de guerra", *EZ Nuevo Herald*, 21 de enero de 2000a.
- . "Ataques recuerdan que la guerra continúa en Colombia", *EZ Nuevo Herald*, 2 de enero de 2000c.
- Agencia EFE. "La guerrilla obtuvo \$3.121 millones en ocho años", *EZ Nuevo Herald*, 12 de mayo de 1999.
- Albright, Madeleine. *Statement on US Assistance to Colombia*. Washington DC: Office of the Spokesman US Department of State, enero 11, 2000.
- . "Colombia's Struggles and How We Can Help ", *The New York Times*, agosto 10, 1999.
- Baena, Javier. "Medellín bajo racionamiento eléctrico tras un grave atentado de la guerrilla", *EZ Nuevo Herald*, 19 de enero de 2000a.
- . "Pastrana acusa a Venezuela de 'irresponsabilidad'", *EZ Nuevo Herald*, 10 de marzo de 2000b.
- Bagley, Bruce Michael. "Dateline Drug Wars: Colombia: The Wrong Strategy", *Foreign Policy*, No. 77, 1989-90, pp. 154-171.
- . "The New Hundred Years War? US National Security and the War on Drugs in Latin America", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*. Vol. 30, No. 1, 1988, pp. 71-92.
- . "Hablando duro: la política internacional anti-narcóticos de los Estados Unidos en los años noventa". En: Tokatlian, Juan Gabriel (compilador). *Colombia y Estados Unidos: problemas y perspectivas*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998, pp. 103-118.
- . "Panamá-Colombia Border Conflicts could threaten the Canal" special to CNN Interactive (<http://cnn.com/SPECIALS/1999/panama.canal/stones/border>) diciembre, 1999.
- Brigs, Matthew. "Contractor Playing Increasing Role in U.S. Drug War", *Dallas Morning News*, febrero 27, 2000.
- Cabrera Lemuz, Adalid. "Bolivia erradica una cifra récord de coca", *EZ Nuevo Herald*, 19 de diciembre de 1999.
- Cepeda Ulloa, Fernando. "El Congreso colombiano ante la crisis". En: Leal Buitrago, Francisco (editor). *Tras las huellas de la crisis política*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Fescol, Iepri (UN), 1996a.
- . "Seguimiento y evolución de la lucha contra la corrupción". En Franco Cuervo, Beatriz, (compilador). *La corrupción y la lucha contra la corrupción*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer y el Goethe-Institut, febrero de 1997, pp. 99-116.
- . "Virtudes y vicios del proceso descentralizador". En: Jaramillo Vallejo, Jaime, (editor). *EZ reto de la descentralización*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Ceja y Fundación Konrad Adenauer, 1996b.
- . Coordinador. *La corrupción administrativa en Colombia: diagnóstico y recomendaciones para combatirla*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Contraloría General de la República y Fedesarrollo, 1994.
- Codhes-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes: *Crisis humanitaria y catástrofe social*, Bogotá, noviembre, 1.999.

- Corral, Hernando. "Sin censura: dinero, paz y Unión Europea", *El Tiempo*, 7 de marzo, 2000.
- Dadau, Michael. "Aid to Colombia: A Study in Middled Arguments". Distributed by e-mail by *The Foreign Policy Research*, Institute of Philadelphia, PA.) Mail to: fpri.org) pp. 1-4.
- Departamento de Estado, *International Narcotics Control Strategy Report*. Washington DC: US Government Printing Office, 1999.
- El Espectador*, "Coca, nudo para el despeje", *El Espectador*, 8 de febrero de 2000.
- El Nuevo Herald*. "Estados Unidos y la guerrilla de Colombia hablan de paz", *El Nuevo Herald*, 4 de enero, 1999b.
- El Nuevo Herald*. "Chávez no tratará directamente con la guerrilla colombiana", *El Nuevo Herald*, 17 de agosto, 1999a.
- El Tiempo*. "Castaño se ve en la mesa de negociaciones", *El Tiempo*, 2 de marzo de 2000a.
- . "El país, al borde del racionamiento por atentados de la guerrilla", *El Tiempo*, 23 de enero de 2000c.
- . "ELN sí pide despeje en el sur de Bolívar", *El Tiempo*, 8 de enero de 2000b.
- . "Sucesos del día", *El Tiempo*, 7 de marzo de 2000d.
- . "Buenos ojos a la ayuda de Estados Unidos", *El Tiempo*, 23 de enero, 2000f.
- . *El boom de las invasiones*. *El Tiempo*, 8 de marzo de 2000e.
- Farra, Douglas. "Drug Sales Change Colombia's Power Balance", *The Washington Post*, noviembre 4, 1999.
- Fram, Alan. "US: Colombian Drug War to Take Five Years", *The Washington Post*, febrero 29, 2000.
- Gao, *Drug Control: Narcotics Threat from Colombia Continúes to Grow* "Washington DC. United States General Accounting Office, junio, 1999d.
- . *US Counternarcotics Efforts in Colombia Face Continuing Challenges*", Washington DC.:United States General Accounting Office, febrero, 1998.
- . Washington DC: United States General Accounting Office, GAO/NSIAD-99-136, junio 22, 1999c.
- . *Customs Service: Drug Interdiction Efforts*. Washington DC: United States General Accounting Office, septiembre 1996.
- . *Drug Control: Assets DOD Contributes to Reducing the Illegal Drug Supply Have Declined*. Washington DC: United States General Accounting Office, diciembre, 1999b.
- . *Drug Control: Narcotics Treta from Colombia Continúes to Grow*, Washington, DC: United States General Accounting Office (GAO), junio 1999a, pp. 4-5.
- *Drug Control: US Efforts in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C.: United States Government Accounting Office, Gao/Nsiad-00-90R, febrero 18, 2000. p. 7.
- García, César. "Tirofijo: si me muero, hay mil que me reemplacen", *El Nuevo Herald*, 30 de enero de 2000.
- Gedda, George. "Colombia Breaking Paramilitary lies", *The Washington Post*, marzo 8, 2000.
- Golden, Tim. "Colombia Asks Congress for Aid Not Tied to Human Rights", *The New York Times*, febrero 26, 2000.
- Gómez Maseri, Sergio. "Clinton le apuesta a Colombia", *El Tiempo*, 12 de enero, 2000.
- Hammer, J. y Isikoff, M. "Fighting the Rebels: A Mysterious Plañe Crash Highlights Covert US. Operations", *Newsweek*, junio. 1999.
- Human Rights Watch, *Colombia 's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States*. Washington D.C.: Human Rights Watch Publications, noviembre, 1996.
- . *The Ties that Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links*. Nueva York: Human Rights Watch, Vol. 12, No. 1, febrero, 2000.

- Johnson, Tim. Colombia's child soldiers. *The Miami Herald*, enero 23, 2000c.
- Kidwell, David. "Haiti Now a Major Route for Cocaine Entering US", *The Miami Herald*, febrero 13, 2000.
- Kovalesky, Sergio. "Thousands Roam Colombia to Escape Brutal Rural War", *The Washington Post*, agosto 11, 1999, p. A01.
- Krauss, Clifford. "Peru's Drug Success Erode as Trafficker Adapt", *The New York Times*, agosto 19, 1999.
- Marcella, Gabriel y Schultz, Donald. "Colombia's Three Wars: US: Strategy at the Cross Roads". *Strategic Review*, Vol. XXVIII, No. 1, invierno, 2000, pp. 3-22.
- Martínez, Margarita. "Colombia Sergeants Convicted", *The Washington Post*, diciembre 20, 1999.
- Office of National Drug Control Policy, *The National Drug Control Strategy, 1998: A Ten Year Plan*. Washington DC: The White House, 1998, pp. 42-5.
- . *The National Drug Control Strategy, 1997*. Washington DC: The White House, febrero 1997, pp. 49-62.
- Orrego, Henry. "Saldo en rojo muestra la economía de Colombia". *El Nuevo Herald*, 7 de agosto de 1999, p. 5B.
- Pastrana, Andrés. "Una política de paz para el cambio". Bogotá: 8 de junio de 1998, mimeo, 17 p.
- Patrick L. Clawson y R. W. Lee III, *The Andean Cocaine Industry*. Nueva York: St. Martin Griffin, 1998, pp. 37-61.
- Peter Lupsha, "Transnational Narco-corruption and Narco Investment: A Focus on México", *Transnational Organized Crime Journal* (primavera 1995).
- Peters, Ralph. "The US Is Setting a Trap for Itself in Colombia", *The Washington Post*, marzo 5, 2000, p. B01.
- Presidencia de la República, *La lucha contra las drogas ilícitas. 1996, un año de grandes progresos*. Bogotá: Presidencia de la República, 1997, pp. 24-25.
- . *Plan Colombia*. Bogotá: Presidencia de la República, septiembre, 1999.
- Prieto San Juan, Rafael. "Conflicto armado en Colombia y desplazamiento forzado: ¿Qué protección? Resisto IIDH, No. 28, julio-diciembre, 1998, pp. 39-68.
- Reuters, "Cae en combate el líder del tercer grupo guerrillero colombiano", *El Nuevo Herald*, 29 de enero de 2000b.
- . "Colombia's Pastrana Plays down FARC's Drug Links", *The Miami Herald*, julio 29, 1999a.
- . "Former Cycling Champ Kidnapped in Colombia", *The New York Times*, marzo 4, 2000c.
- . "Pastrana destituye a generales acusados de nexos paramilitares", *El Nuevo Herald*, 9 de abril de 1999b.
- . "Se han desplazado un millón 700 mil colombianos por la guerra", *La jornada*, noviembre 25, 1999c.
- . "Traffickers Moving Back to Caribbean-US Drug Czar", *The New York Times*, febrero 10, 2000a.
- . "Albright Discusses Anti-Drug Aid in Colombia", *The Washington Post*, enero 15, 2000d.
- . "High-level Visit Signal US Alarm Over Colombia", *The Washington Post*, agosto 11, 1999c, p. A15.
- Revista *Cambio*, "Carlos Castaño, jefe de las autodefensas", *Revista Cambio*, 29 de noviembre al 6 de diciembre, 1999.
- Reyes Posada, Alejandro. "Investigación sobre geografía de la violencia", *El Tiempo*, 17 de octubre de 1999.
- Ricardo Sandoval, "Albright Hails Mexican Role on Drugs", *The Miami Herald*, enero 17, 2000.
- Riley, Michael. "México Claims Greater Success in War on Drugs", *Houston Chronicle.com*, enero 26, 2000.

- Robinson, Linda. "Where Angels Fear to Tread: Colombia and Latin America's Tier of Turmoil", *World Polio/Journal*, invierno 1999/2000, p. 64.
- Roll, David. "La corrupción política en Colombia, del subrealismo a la realidad virtual". En: B. Franco-Cuervo (compilador), *La corrupción y la lucha contra la corrupción*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer y el Goethe-Institut, febrero de 1997, pp. 117-134.
- Rother, Larry, "Driven by Fear, Colombians Leave in Droves", *The New York Times*, marzo 5, 2000.
- . "Crisis in Colombia as Civil Strife Uproots Peasants", *The New York Times*, octubre 21, 1999.
- . "Haití Parálisis Brings a Boom in Drug Trade", *The New York Times*, octubre 27, 1988.
- Sam Dillon, "Trial of a Drug Czar Tests Mexico's New Democracy", *The New York Times*, agosto 22, 1997.
- Seattle Post-Intelligencer Editorial Board, "Spraying Coca Crop is a Misplaced Priority", *Seattle Post-Intelligencer*, marzo 9, 2000.
- Semana, "Como nos ven en Wall Street", revista *Semana*, edición 931, marzo 6, 2000d.
- . "Corrupción", revista *Semana*, edición 928, febrero 28, 2000a.
- . "Cultivos ilícitos: la ola verde", revista *Semana*, edición 903, agosto 23, 1999a.
- . "El cheque del Tío Sam", revista *Semana*, edición 924, enero 17, 2000e.
- . "El ELN y los alemanes", revista *Semana*, edición 893, junio 14 de 1999L
- . "Guerra de dos mundos", revista *Semana* edición 930, febrero 28, 2000f.
- . "Informe Especial: los negocios de las FARC". revista *Semana*, edición 879, marzo 8, 1999d.
- . "Informe especial: los negocios de las FARC", revista *Semana*, edición 879, marzo 8 de 1999e.
- . "La bofetada", revista *Semana*, edición 894, junio 21 de 1999j.
- . "La caldera del diablo", revista *Semana*, edición 930, febrero 28, 2000b.
- . "La luz al final del túnel", revista *Semana*, edición 924, enero 17, 2000c.
- . "Los misiles de las FARC", revista *Semana*, edición 905, septiembre 6 de 1999f.
- . "Narco-Castaño?", revista *Semana*, edición 886, abril 26 de 1999h.
- . "Narcotráfico: Cuentas Pendientes", revista *Semana*, edición 913, nov. 1° de 1999b.
- . "Narcotráfico: el imperio de 'Juvenal'", revista *Semana*, edición 912, octubre 25, 1999c.
- . "Proceso de Paz: la paz armada", revista *Semana*, edición 873, enero 25 de 1999g.
- . "Si estamos cobrando", revista *Semana*, edición 918, diciembre 20, 1999k
- . "Economía y negocios: El chorro", revista *Semana*, edición 913, noviembre 1°, 1999n.
- . "Economía y negocios: En tierra de ciegos...", revista *Semana*, edición 879, marzo 8, 1999m.
- . "Tráfico de armas: la conexión venezolana", revista *Semana*, edición 898, julio 19 de 1999l.
- . "La suerte de ERP", revista *Semana*, edición 903, febrero 28, 2000c.
- Semple, Kirk. "Major Arrests Sabotaje Colombian Drug Network", *The Washington Post*, octubre 14, 1999.
- Shifter, Michael. "Colombia on the Brink", *Foreign Affairs*, Vol. 78, No. 4, julio-agosto, 1999. pp. 14-20.
- . "The United States and Colombia: Partners in Ambiguity", *Current History*, febrero, 2000, p. 51.
- Stever Ambrus y Joe Contreras, "Fighting the Enemy Within: The 'FARC Republic': A New Outlaw State in the Heart of South America", *Newsweek International*, noviembre 29, 1999.
- Sweeny, John P. "Colombia's Narco-Democracy Threatens Hemispheric Security". *Backgrounder*

- No. 1028, The Heritage Foundation, marzo 21, 1995.
- . "Tread Cautiously in Colombia's Civil War". Washington DC: The Heritage Foundation, *Backgrounder*, No. 1264, marzo 25, 1999.
- The Associate Press, "Comandante colombiano rebate declaraciones de líder guerrillero", *El Nuevo Herald*, 30 de enero, 2000c.
- . "Colombia Breaks Kidnap World Record", *The New York Times*, enero 28, 2000g.
- . "Colombia Rebel Rips Pastrana Plan", *The Washington Post*, febrero 29, 2000L
- . "Colombian Militias Tax Drug Trade", *The New York Times*, enero 10, 2000d.
- . "Colombian Rebels Vow More Sabotage", *The New York Times*, enero 20, 2000e.
- . "DEA, Cocaine Production Grows", *The New York Times*, enero 18, 2000a.
- . "Doubts over US-Colombia Policy", *The New York Times*, febrero 15, 2000h.
- . "Groups Kill 11 in Colombia", *The New York Times*, marzo 13, 2000f.
- . "Jamaican Fishermen's Tainted Boom: Rising Trade in Cocaine", *The New York Times*, febrero 11, 2000b.
- The Economist*, "Andean Coca Wars: Special: A Crop that Refuses to Die", *The Economist*, marzo 4, 2000.
- The New York Times*, "Dangerous Plans for Colombia", *The New York Times*, febrero 13, 2000 .
- The Washington Post*. "Colombian Rebels Tap E. Europe for Arms", *The Washington Post*, noviembre 4, 1999.
- The White House, *T-act Sheet: Colombia Assistance Package*, Grand Canyon, Arizona: Office of the Press Spokesman, The White House, enero 11, 2000.
- Thomson, Adam. "Colombia: 'Mafia Links' Boost Cocaine Exports", *The Financial Times*, noviembre 29, 1999.
- Tim Golden, "Mexican Tale of Absolute Corruption", *The New York Times*, enero 9, 2000.
- . "México and Drugs: Was US Napping?", *The New York Times*, julio 11, 1997.
- Tim Johnson, "Colombia's War on Drugs Goes Airborne", *The Miami Herald*, febrero 11, 2000c.
- ---. "Colombian Coca Fields Flourishing, CIA Reports", *The Miami Herald*, enero 21, 2000a.
- . "Radar Gap Helps Colombian Drug Smugglers". *The Miami Herald*, febrero 5, 2000b.
- Tokatlian, Juan Gabriel. "Colombia en guerra: las diplomacias por la paz", *Desarrollo Económico*. Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires), Vol. 39, No. 155, octubre-diciembre 1999, pp. 339-360.
- . "Colombian Catastrophe". *The World Today*, Vol. 56, No. 1, enero 2000, pp. 13-15.
- Torres De La Llosa, Luis. "La ayuda de Estados Unidos irá contra las FARC si trafican droga", *El Nuevo Herald*, 27 de enero, 2000.
- Travierso, María "Representantes federales abogan por los inmigrantes colombianos", *El Nuevo Herald*, 20 de enero de 2000).
- Waller, J. Michael. "The Narcostate Next Door", *Insight Magazine*. [www.insightmag.com/archive/199912048.shtml](http://www.insightmag.com/archive/199912048.shtml).
- Younger, Coletta. "Coca Eradication Efforts in Colombia" En: Wola (editor), *Wola Briefing Series: Issues in Institutional Drug Policy*. Washington DC: Wola, junio, 1997.